



UNIVERSIDAD NACIONAL

“PEDRO RUIZ GALLO”

ESCUELA DE POSTGRADO



DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

**“Regulación de la Declaratoria de suspensión de los
efectos de una sentencia que dispone la
Inconstitucionalidad de una Norma Jurídica con
Rango de Ley (Lambayeque, 2015-2017)”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**

AUTORA:

Mirez La Rosa, Laurie Karim

ASESOR:

Dr. Falla Lamadrid, Luis Humberto

LAMBAYEQUE - PERÚ

2019

Elaborada por:

Abog. LAURIE KARIM MIREZ LA ROSA
TESISTA

Dr. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID
ASESOR DE TESIS

Presentada a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. Para optar el Grado Académico de: **Doctor en Derecho y Ciencia
Política.**

Aprobada por:

Dr. JOSÉ MARIA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
SECRETARIO DEL JURADO

Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ
VOCAL DEL JURADO

Lambayeque, Diciembre de 2018

PRESENTACIÓN

La Tesis que su autora titula: REGULACIÓN DE LA DECLARATORIA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE DISPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA JURÍDICA CON RANGO DE LEY (Lambayeque, 2015-2017), nos permite entender una temática de relevancia jurídica y social, referido a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, en lo que respecta a los efectos inmediatos de este tipo de sentencias, las cuales pueden ser la aparición de vacíos legales, incertidumbre jurídica provocando puedan ser vulnerados los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En su investigación, la tesista señala que como solución a esa problemática debe regularse una figura denominada VACATIO SENTENTIAE, que supone la suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucional de una norma jurídica con rango de ley; asimismo señala, esta regulación debe ser realizada en un plano constitucional, debido a que es en este mismo nivel donde se establece que las sentencias de inconstitucionalidad surten efectos al día siguiente de su publicación.

Dr. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID

Asesor de Tesis

INDICE

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS	7
RESUMEN	9
ABSTRACT	11
INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	15
1.1. UBICACIÓN.....	15
1.1.1. Ubicación Geográfica	15
1.1.2. Ubicación Temporal.....	15
1.2. PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
1.2.1. Formulación del Problema	23
1.2.2. Justificación del estudio	23
1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA	25
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA	26
1.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS	26
1.4.2. OBJETIVOS	26
1.4.3. ÁREA DE ESTUDIO – UBICACIÓN METODOLÓGICA.....	27
1.4.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	27
1.4.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICABLES EN LA INVESTIGACIÓN.....	27
1.4.6. POBLACIÓN DE ESTUDIO.....	28
1.4.7. MUESTRA DE ESTUDIO.....	28
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	31
SUB CAPITULO I: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	31
1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	31
1.1. ANTECEDENTES	31
1.2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993.....	35
1.3. CONCEPTO.....	38
1.4. CARACTERÍSTICAS.....	38
1.5. NATURALEZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	40
1.6. FINALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	49
1.7. PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL	50
1.7.1. IMPARCIALIDAD	51
1.7.2. RESPETO DEL DEBIDO PROCESO FORMAL Y MATERIAL	53
1.7.3. CARÁCTER JURISDICCIONAL DE SU ACTUACIÓN	54

1.7.4.	SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN	55
1.8.	AUTONOMIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	58
2.	CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD	59
2.1.	ANTECEDENTES	59
2.2.	CONCEPTO.....	60
2.3.	JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL	61
2.4.	SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD	62
2.4.1.	REVISIÓN JUDICIAL O <i>JUDICIAL REVIEW</i>	62
2.4.2.	SISTEMA CONCENTRADO	64
2.4.3.	SISTEMA DIFUSO.....	64
2.4.4.	DIFERENCIAS.....	64
2.5.	CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ.....	65
	SUB CAPITULO II: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD	70
1.	PROCESOS CONSTITUCIONALES	70
1.1.	CONCEPTO.....	70
1.2.	CLASES DE PROCESOS CONSTITUCIONALES.....	71
1.2.1.	PROCESO DE TUTELA DE DERECHOS.....	72
1.2.1.1.	PROCESO DE CUMPLIMIENTO	72
1.2.1.2.	PROCESO DE HÁBEAS DATA.....	74
1.2.1.3.	PROCESO DE HÁBEAS CORPUS.....	78
1.2.1.4.	PROCESO DE AMPARO	80
1.2.2.	PROCESO DE PRIMACIA DE LA CONSTITUCION.....	82
2.	PROCESO DE INCONSTITUCIONAL.....	83
2.1.	CONCEPTO.....	83
2.2.	CARACTERISTICAS ESPECIALES.....	84
2.3.	ETAPAS.....	88
2.3.1.	LEGITIMACIÓN	88
2.3.2.	PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA: RANGO DE LA NORMA INPUGNADA	90
2.3.3.	PRETENSIÓN DE LA DEMANDA	92
2.3.3.1.	CAUSA PETENDI: PROTECCIÓN FRENTE A INFRACCIÓN A LA JERARQUÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN.....	93
2.3.3.2.	PETITUM	97
	SUB CAPITULO III: SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD	99
1.	SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	99

1.1. CONCEPTO.....	99
1.2. TIPOS DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES	102
1.2.1. SENTENCIAS REDUCTORAS	102
1.2.2. SENTENCIAS ADITIVAS.....	103
1.2.3. SENTENCIAS SUSTITUTIVAS.....	103
1.2.4. SENTENCIAS ESTIPULATIVAS.....	103
1.2.5. SENTENCIAS EXHORTATIVAS.....	104
2. SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD.....	106
2.1. CONCEPTO.....	106
2.2. MODALIDADES DE SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD	108
2.3.1. SENTENCIAS ESTIMATIVAS.....	108
2.3.2. SENTENCIAS DESESTIMATIVAS.....	111
2.3. EFECTOS	112
3. VACATIO SENTENTIAE	113
3.1. CONCEPTO.....	113
CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO.....	115
3.1. ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS.....	115
3.1.1. Encuesta a operadores jurídicos	115
3.1.2. Análisis de los Resultados	131
3.1.3. Discusión de los Resultados.....	139
3.1.4. Contrastación de hipótesis.....	145
CONCLUSIONES	147
RECOMENDACIONES.....	149
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	151
ANEXOS.....	157

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

CUADROS

Cuadro N°01: Principal función del Tribunal Constitucional	117
Cuadro N°02: Principios de la actuación del Tribunal Constitucional	118
Cuadro N°03: Concepto del Proceso Constitucional	119
Cuadro N°04: Proceso de Inconstitucionalidad	120
Cuadro N°05: Finalidad del Proceso de Inconstitucionalidad	121
Cuadro N°06: Inconstitucional una norma jurídica con rango de Ley.....	122
Cuadro N° 07: Sentencia constitucional	123
Cuadro N° 08: Sentencia de inconstitucionalidad.....	124
Cuadro N°09: Principio que fundamenta la sentencia de inconstitucionalidad	125
Cuadro N°10: Concepto vacatio sententiae	126
Cuadro N°11: Fundamentos jurídico-sociales para la vacatio sententiae.....	127
Cuadro N° 12: Efectos de la no aplicación de la vacatio sententiae	128
Cuadro N°13: La vacatio sententiae y la certeza de cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad.....	129
Cuadro N°14: Regulación constitucional de la vacatio sententiae.....	130

FIGURAS

Figura 1	117
Figura 2	118
Figura 3	119
Figura 4	120
Figura 5	121
Figura 6	122
Figura 7	123
Figura 8	124
Figura 9	125
Figura 10	126
Figura 11	127
Tabla 12	128
Figura 13	129
Figura 14	130

RESUMEN

En la presente investigación intitulada: REGULACIÓN DE LA DECLARATORIA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE DISPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA JURÍDICA CON RANGO DE LEY (Lambayeque, 2015-2017). Se planteó como objetivo general, Proponer la regulación de la figura jurídica de la VACATIO SENTENTIAE, como mecanismo de declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el propósito de otorgar mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

Esta investigación es de nivel explicativo porque permitió determinar si nuestra propuesta era viable, también se desprende la existencia de las variables de investigación que son: -La regulación de la suspensión de la vigencia de una sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley y mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Para nuestra investigación tenemos como población a 62 operadores jurídicos de la Ciudad de Chiclayo.

Para lograr corroborar nuestra hipótesis: —Sí, se regulará en el plano constitucional, la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, ENTONCES, se otorgará mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Se utilizó un cuestionario que fue elaborado en base a las dimensiones e indicadores de nuestras variables. Después de ser aplicado el cuestionario los resultados fueron procesados y analizado en tablas y gráficos, los que junto al

análisis doctrinario realizado en las bases teóricas del trabajo permitieron llegar a dos conclusiones principales, el primero es que la a regulación el plano constitucional de la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad (*vacatio sententiae*) de una norma jurídica con rango de ley es correcta pues permitirá otorgarle mayor certeza de cumplimiento a la sentencia de inconstitucional y evitará la aparición de situación de vulnerabilidad para los ciudadanos y el segundo es que los fundamentos jurídico-sociales para la suspensión de efectos de la sentencia que dicta la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, son: evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del país, dar un mayor grado de certeza de cumplimiento a la sentencia y expulsión de normas inconstitucionales sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía.

Palabras claves: Tribunal constitucional, proceso de inconstitucionalidad, norma de rango ley, suspensión de efectos, sentencia constitucional, primacía de la Constitución.

LA AUTORA

ABSTRACT

In the present investigation titled: REGULATION OF THE DECLARATION OF SUSPENSION OF THE EFFECTS OF A JUDGMENT THAT PROVIDES THE UNCONSTITUTIONALITY OF A LEGAL STANDARD WITH RANK OF LAW (Lambayeque, 2015-2017). The general objective was to propose the regulation of the legal concept of the VACATIO SENTENTIAE, as a mechanism for the declaration of suspension of the effects of a judgment that provides for the unconstitutionality of a legal norm with the status of a law, with the purpose of granting greater certainty of compliance with the provisions of the Constitutional Court.

This investigation is of explanatory level because it allowed to determine if our proposal was viable, it also follows the existence of the research variables that are: "The regulation of the suspension of the validity of a sentence of declaration of unconstitutionality of a norm with the rank of law and greater certainty of compliance with the provisions of the Constitutional Court. For our research, we have 62 Jewish operators as population from the city of Chiclayo.

To achieve corroborate our hypothesis: "YES, will be regulated in the constitutional plan, the declaration of suspension of the effects of a ruling of unconstitutionality of a rule with the status of law, THEN, will be granted greater certainty of compliance with the provisions of the Court Constitutional. A questionnaire was used that was elaborated based on the dimensions and indicators of our variables. After the questionnaire was applied, the results were processed and analyzed in tables and graphs, which together with the doctrinal analissiste reacted in the theoretical bases of the work allowed to reach two main

conclusions, the first is that the regulation of the constitutional plan of the suspension of the unconstitutionality judgments (*vacatio sententiae*) of a legal norm with the rank of a law is correct because it will allow greater certainty of compliance with the unconstitutional ruling and avoid the emergence of a situation of vulnerability for citizens and the second is that the legal foundations - social for the suspension of effects of the sentence that dictates the unconstitutionality of a norm with the rank of law, are: to avoid a normative vacuum that would originate serious consequences in the legal and constitutional order of the country, give a higher degree of certainty of compliance to sentence and expel unconstitutional rules without producing go situations of vulnerability for citizens.

Keywords: constitutional court, unconstitutionality process. Norma of law rank, suspension of effects, constitutional sentence, primacy of the constitution.

THE AUTHOR

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Constitucional, actualmente cumple funciones y roles encomendados por la sociedad y la misma constitución; estas funciones consisten en mantener un orden normativo en consonancia a la constitución peruana, lo que permite afirmar que el Tribunal constitucional realiza un control de constitucionalidad y tutela los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución, para lo cual la misma constitución establece mecanismos (procesos constitucionales).

Dentro de ello en la presente investigación se tiene como un pilar de estudio y análisis al proceso de inconstitucionalidad, de forma más clara las sentencia que origina este proceso constitucional. Las sentencias de inconstitucional, tiene su base en la existencia de una norma con rango de ley que se opone o contraviene ya sea en forma o fondo a la constitución, lo que trae a colación que un legitimado pueda iniciar el proceso de inconstitucionalidad, en este proceso se analizara la infracción que tiene dicha norma a la constitución, que puede ser una infracción de fondo o forma, infracción directa o indirecta, etc.

El Tribunal Constitucional en este proceso realizara una interpretación de la norma en consonancia a la constitución, con el objetivo de aplicar el principio de supremacía constitucional.

Después de su labor interpretativa el Tribunal Constitucional, emitirá una determinada sentencia, ya sea amparando o no la demanda, en caso la demanda de inconstitucionalidad haya sido amparada, el tribunal constitucional puede ordenar la adecuación de la norma o la expulsión de la misma del ordenamiento jurídico. La problemática aparece en esta parte del proceso de

inconstitucionalidad, pues la constitución establece que las sentencias de inconstitucionalidad surten efectos al día siguiente de su publicación, lo que ocasiona la existencia de vacíos legales e incertidumbre jurídica para el respeto y amparo a los derechos de los ciudadanos.

Lambayeque, Diciembre de 2018

Abog. LAURIE KARIM MIREZ LA ROSA
TESISTA

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN

1.1.1. Ubicación Geográfica

Las sentencias de tribunal constitucional se caracterizan por tener efectos —erga omnes—, es decir, supone que su cumplimiento es oponible a todos, pues no resuelven un conflicto de intereses inter-partes. En consecuencia, cabe señalar que la problemática de la suspensión de los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad que emite el Tribunal Constitucional se encuentra geográficamente en todo el territorio nacional, pues todos los peruanos estamos supeditados a cumplir con las resoluciones de inconstitucionalidad emitidas por nuestro máximo intérprete constitucional.

En ese sentido nuestra investigación se llevó acabo en la ciudad de Lambayeque, donde tuvimos como idóneas unidades de análisis a los operadores jurídicos del Distrito judicial de Lambayeque.

1.1.2. Ubicación Temporal

La investigación se desarrollará en el presente año 2018, en el Distrito Judicial de Lambayeque; debido a la fácil accesibilidad a nuestras unidades de análisis.

1.2. PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Perú, el Órgano encargado de promulgar leyes es el Poder Legislativo, representado por su máximo exponente en la figura del Congreso de la República, leyes que son dictadas para su efectivo cumplimiento por todos sus habitantes, adquiriendo sus efectos al día

siguiente de su publicación en el diario oficial, que en este caso es el diario —El Peruano—. Sin embargo, al poder ejecutivo le asiste esta función cuando de manera expresa recibe tal encargo de parte del legislativo. Sobre esta situación, el art. 51º de nuestra constitución Política determina que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

Múltiples son los factores o condicionantes que conllevan a la necesidad de aprobación de una ley, la que ha de pasar diversos filtros para que guarde consonancia con los principios de jerarquía y coherencia normativa. Pero no todas las leyes promulgadas resultan ser constitucionales, siendo que algunas contravienen a la máxima carta política peruana, deviniendo en consecuencia en inconstitucionales. Dichas leyes son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (órgano encargado de velar por la Constitución Política, asignándole la función de conocer y resolver como única instancia las demandas de inconstitucionalidad), en resoluciones declaradas fundadas en un proceso de inconstitucionalidad, lo cual arrebató a las normas materia de debate sus efectos, las mismas que cuentan con ámbitos generales y no tienen efectos retroactivos: asimismo, estas sentencias serán publicitadas de forma íntegra en el Diario Oficial —El Peruano — surtiendo efectos a partir del día siguiente.

Por otro lado, una norma jurídica es considerada válida si ha cumplido con el iter procedimental al momento de su creación, dicho iter procedimental es el regulador de la producción jurídica. Por lo tanto, una norma jurídica será creada considerando los criterios previstos, así

tenemos los criterios de competencia y los criterios procedimentales que el propio ordenamiento ha establecido; asimismo, dichos criterios deben ser acordes a parámetros de materia y respetando los valores y principios establecidos en normativas jerárquicamente superiores.

Lo expuesto precedentemente lleva a sostener que el carácter de válido de una norma jurídica debe diferenciarse con el aspecto referido a su pertinencia al sistema normativo. Debido a que el sistema normativo está compuesto por las normas válidas e, incluso, a las inválidas, pues, tratándose de estas últimas, existe una presunción de validez que subsiste en tanto no se expida un acto jurisdiccional que la declare inválida. Y es que si bien, por definición, toda norma válida se considera vigente, no necesariamente toda norma vigente es una norma válida.

La vigencia de una norma jurídica depende, *prima facie*, de que haya sido aprobada y promulgada por los órganos competentes, y además de que haya sido publicada conforme lo establece el último extremo del artículo 51º de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que la norma es eficaz. De este modo, el efecto práctico de la vigencia de una norma es su eficacia, siendo que para que una norma sea eficaz debe ser aplicada como un mandato dentro del Derecho. La misma Constitución en su artículo 109º, prescribe que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, **salvo disposición contraria** (excepción expresamente regulada) de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte, lo que en doctrina ha dado en llamarse *VACATIO LEGIS*.

Ahora bien, en cuanto a los efectos de las sentencias, el artículo 204º de la Constitución Política, establece que las Sentencias del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el Diario Oficial, **surtiendo efectos, sin admitir excepción alguna al día siguiente de su publicación**, precisando que la norma declarada inconstitucional quedara sin efecto al día siguiente de su publicación. Además, se establece como regla general el principio de irretroactividad.

A su vez, la primera parte del artículo 40º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 26435, prevé dos excepciones a tal regla, al establecer que: *-Las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad no permiten revivir procesos fenecidos en los que se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103º (retroactividad benigna en materia penal) y último párrafo del artículo 74º de la Constitución*, y, que *-por la declaración de inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado*. Cabe señalar que no establece ninguna otra excepción.

Lo anterior resulta que no es factible suspender los efectos de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, puesto que si una norma es inconstitucional, con sentencia publica, es posible que aún se mantenga vigente en el ordenamiento jurídico. En ese mismo sentido, se tiene que una norma que es declarada inconstitucional y no sacada del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia plena como si se tratara de

una norma cuya inconstitucionalidad no ha sido tratada, siendo que la Constitución Política no permite la excepcionalidad de una norma declarada inconstitucional por sentencia del tribunal constitucional.

No se puede dejar de mencionar las justificaciones que el Tribunal Constitucional viene empleando para sustentar sus decisiones respecto de la suspensión de la vigencia de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley. Al respecto, se dice que el Tribunal Constitucional *-tiene el deber de prever las consecuencias de sus decisiones y, por tal motivo, teniendo en cuenta la inconstitucionalidad de las normas por la vulneración de derechos previstos por la Constitución, dejaría un vacío normativo susceptible de generar consecuencias económicas importantes, disponiéndose una VACATIO SENTENTIAE*^{II}.

Al efectuar un repaso de los principios que rigen nuestro sistema jurídico nacional, advertimos de la presencia de dos grandes pilares como el principio de jerarquía normativa y el principio de coherencia normativa. Por el primero se tiene que toda norma independientemente de su rango o grado siempre estará sometido a una norma superior hasta llegar a la Constitución Política; por el segundo de los principios todas las normas entre sí deben guardar armonía para mantener el equilibrio del ordenamiento jurídico.

De tal forma que una norma jurídica que violente ambos o cualesquiera de estos principios está destinada a ser expulsada del ordenamiento Jurídico. Si se trata de una norma con rango de ley el encargado de su expulsión será el tribunal constitucional; para cuyo efecto la constitución

en su artículo 204º precisa que las sentencias que emita este Supremo colegiado declarando la inconstitucionalidad de la norma, quedaran sin efecto al día siguiente de su publicación en el diario Oficial —El Peruano—.

Por lo que el tema bajo estudio gira en torno a las facultades, o exceso de estas, que pudiera tener, o en las que pudiera incurrir, el Tribunal Constitucional, al hacer uso de excepciones no contempladas en la Constitución.

Artículo 81.- Efectos de la sentencia fundada

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación.

Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo en vigencia.

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcances en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano.

Como parte de nuestra realidad problemática tenemos los siguientes procesos de inconstitucionalidad:

EXP. N.º 010-2002-AI/TC: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos, con firmas debidamente certificadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, contra los Decretos Leyes N.º 25475, 25659, 25708 y 25880, así como sus normas complementarias y conexas.

Exp. N.º 00005-2007-PI/TC: Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque contra la Ley N.º 28934, que amplía excepcional y temporalmente la vigencia de la actual Justicia Militar Policial.

EXP. N.º 033-2004-AI/TC: Acción de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Roberto Nesta Brero y Augusto Javier Aida Susuki, en representación de más de 5,087 ciudadanos con firmas certificadas, contra el artículo 125º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N.º 054-99-EF, el que fuera incorporado por el Decreto Legislativo N.º 945, y contra la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.º 27804.

Exp. 0030-2004-AI/TC: Proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 10 de la Ley N.º 28047)

EXP. N.º 00016-2007-PI/TC: Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio Economistas de Ucayali contra los Decretos Legislativos N.º 977 y 978, expedidos por el Poder Ejecutivo, que modifican parcialmente la Ley N.º 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.

EXP. N.º 0023-2003-AI/TC: Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra los artículos II y III del Título

Preliminar del Decreto Ley N° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar; el primer y segundo párrafo del artículo 374°; el cuarto y quinto párrafo del artículo 375°, y los artículos 269°, 378° y 387° del Decreto Ley N.º 23214, Código de Justicia Militar; la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N.º 27860, del Ministerio de Defensa, en la parte referida al Consejo Supremo de Justicia Militar; así como el segundo y último párrafo del artículo 6°, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 7°, el segundo párrafo del artículo 8°, los incisos 1), 6) 14), 15), 19) Y 20) del artículo 12°, el inciso 2) del artículo 14°, el primer y segundo párrafo del artículo 22°, el primer y tercer párrafo del artículo 23 0, el segundo, cuarto y quinto párrafo del artículo 31 0, el segundo párrafo del artículo 32°, los literales a), b) y c) del artículo 65 °, el segundo párrafo del artículo 75° y los artículos 15°, 38°, 62°, 63°, 65°, 66°, 67°, 69° y 81 ° de la mencionada Ley Orgánica de la Justicia Militar.

Exp. 0004-2016-PI/TC: Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Fiscal de la Nación contra determinados extremos de la Ley 28665, de Organización, Funciones y Competencia de la Jurisdicción Especializada en Materia Penal Militar Policial

Del análisis de dichas sentencias se desprende que el propio tribunal constitucional ha establecido que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma legal debe ser en base a la *vacatio sententiae* sin embargo esta situación es carente de regulación lo que implica que no sea obligatorio cumplimiento. En consecuencia, después de haber delimitado aspectos normativos y jurisprudenciales y facticos

sobre la *vacatio sententiae* pasaremos a exponer nuestra interrogante de investigación:

1.2.1. Formulación del Problema

¿De qué manera la regulación constitucional de la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley otorgará mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional? (Lambayeque, 2015-2017)

1.2.2. Justificación del estudio

Con acierto se sostiene que —El propósito de la investigación debe ser debidamente justificado, respecto a su conveniencia, relevancia social, implicancias prácticas, valor teórico y utilidad metodológica...una investigación puede ser conveniente por diversos motivos, podría en algunas circunstancias ayudar a resolver un problema social o contribuir a la construcción de una nueva teoría. De otro lado, puede ayudar a crear un nuevo instrumento metodológico para la recopilación o análisis de datos, contribuir a la definición de una variable o relación entre variables; asimismo, puede lograrse las formas de experimentar con una o más variables de una manera más adecuada. Evidentemente, sería difícil que una investigación científico-social pueda responder positivamente a todas las motivaciones de justificación, es posible que sólo pueda cumplirse uno de los criteriosll.

A nivel temático, la investigación se justifica porque permite profundizar las doctrinas a nivel de lo que es una Ley, su vigencia y suspensión, VACATIO SENTENTIAE, así como conocer los efectos de declarar una norma inconstitucional, los problemas que con ello trae como consecuencia.

De otro lado, también se justifica porque permite dar a conocer los sustentos normativos constitucionales para que el Tribunal Constitucional al declarar una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley adquiera la potestad de suspender sus efectos en el tiempo.

Ahora bien, la vigencia de una norma jurídica depende, prima facie, de que haya sido aprobada y promulgada por los órganos competentes, y además de que haya sido publicada conforme lo establece el último extremo del artículo 51º de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que la norma es eficaz. Se justifica esto, puesto que a pesar de que una ley sigue el procedimiento de acuerdo a la Constitución Peruana, muchas normas dictadas no resultan ser eficaces, sino que por el contrario resultan ser perjudiciales para el sector para el cual se crea, deviniendo estas en contradictorias a la carta máxima, es decir en inconstitucionales.

Si bien, la ley, es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte, lo que en doctrina ha dado en llamarse VACATIO LEGIS, esta forma de suspender los efectos en el tiempo de

una sentencia emitida por el tribunal constitucional no encuentra sustento constitucional para su emisión, siendo necesario y en eso consiste la investigación, proporcionar los fundamentos necesarios para que los efectos de una sentencia del Órgano encargado de salvaguardar la Constitución pueda suspenderlos en el tiempo.

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

El problema de investigación se manifiesta en nuestra realidad actual debido a que el máximo intérprete de la constitución, el Tribunal Constitucional en su labor de defensor de la constitución expide sentencia de algunas normas que están en contra de la constitución, lo que implica que estas normas deben ser desterradas del sistema normativo, este destierro en base a la constitución debe realizarse al día siguiente de la publicación de la sentencia lo que implica una cesación de efectos de la norma jurídica inconstitucional, he ahí el problema con la suspensión de efectos de una norma jurídica inconstitucional pueden crearse situaciones de vulnerabilidad y casos de desproporcionalidad, asimismo una íntima relación con la certeza de cumplimiento de estas sentencias de inconstitucionalidad.

El problema se caracteriza por estar presente en nuestra realidad y que debe ser estudiado y tratado, encontrando en la suspensión de efectos de una sentencia de inconstitucionalidad (*vacatio sententiae*) una solución a los problemas que ocasionaría que estas sentencias de inconstitucionalidad surten efectos de forma inmediata.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

1.4.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

1.4.1.1. Hipótesis

—Si, se regulará en el plano constitucional, la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, ENTONCES, se otorgará mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

1.4.1.2. Identificación de Variables:

A. Variable Independiente:

- La regulación de la suspensión de la vigencia de una sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley.

B. Variable Dependiente:

- Mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

1.4.2. OBJETIVOS

1.4.2.1. Objetivo General

- Proponer la regulación de la figura jurídica de la VACATIO SENTENTIAE, como mecanismo de declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el propósito de otorgar mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

1.4.2.2. Objetivos Específicos

- Conocer y comprender la figura jurídica de la VACATIO SENTENTIAE.
- Analizar los efectos que acarrea suspender los efectos de una sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad.

- Determinar el fundamento normativo- constitucional por lo que el Tribunal Constitucional emite sentencias de inconstitucionalidad de una norma con efectos suspensivos en el tiempo.
- Sustentar los fundamentos de un proyecto de ley que determine taxativamente la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley.

1.4.3. ÁREA DE ESTUDIO – UBICACIÓN METODOLÓGICA:

- a. **Área de estudio** : Dimensión Praxiológica
- b. **Nivel Epistemológico** : Valoración.
- c. **Tipo de Investigación**: Investigación Cuantitativa-Cualitativa y Teórica-Explicativa.

1.4.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:

- a. **Espacial**: En la ciudad de Chiclayo
- b. **Temporal**: Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.
- c. **Cuantitativa**: Cantidad de sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional
- d. **Cualitativa**: Nivel de valoración de las opiniones proporcionadas por los Magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público; Abogados; y docentes de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas

1.4.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICABLES EN LA INVESTIGACIÓN

- A. **Métodos**: Entre los métodos tenemos: Inductivo-deductivo, exegético, analítico, sintético, descriptivo-explicativo, dogmático.
- B. **Técnicas**: Tenemos: la Observación, Bibliográficas, documental, fichaje y encuesta.

1.4.6. POBLACIÓN DE ESTUDIO

De lo general a lo específico, diremos que, como referente territorial, la presente investigación, se desarrolló sobre el Departamento de Lambayeque. Así pues, la población del presente trabajo de investigación, está constituida por toda la población de magistrados, Fiscales, Abogados y Docentes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Ciudad de Chiclayo (operadores jurídicos)

1.4.7. MUESTRA DE ESTUDIO

La muestra es el conjunto de datos sobre los hechos o fenómenos jurídicos que se estudian, representativos de todas las ocurrencias producidas en el universo social general, vale decir, refleja todo lo que acontece en el sistema social global, respecto al problema jurídico, que es objeto de investigación.

En el presente estudio, la muestra viene conformada por el porcentaje estadístico necesario que permita establecer una visión especial de la problemática planteada. Las muestras obtenidas contienen los datos relacionados con el problema de la investigación, por lo que serán recogidas tomando en cuenta a la población de estudio, en un porcentaje no menor al 10% del total. De otro lado, se procederá a recopilar información (a través de encuestas) de los operadores del derecho, en una proporción no menor al 10% según el sector al que pertenecen, ya sea como Magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público; Abogados; y docentes de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas.

La muestra viene a ser el subconjunto de elementos que pertenecen a la población. Siendo así, la muestra estará conformada por el porcentaje estadístico necesario que permita establecer una visión especial de la problemática planteada. De tal forma que el tamaño de la muestra será calculado teniendo en cuenta la población de los encuestados (Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque), para lo cual se tendrá en cuenta la siguiente fórmula estadística:

LEYENDA:

n = Tamaño de la muestra.

N = Tamaño de la población.

p y q = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Siendo así, la población conformada por los Abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Lambayeque oscila entre los 3589 Abogados, según los datos obtenidos del último proceso electoral en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque; de los cuales la MUESTRA quedará conformada como sigue:

$$n = 3589 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2$$

$$(0.05)^2 \times (3589 - 1) + (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2$$

$$n = 3589 \times 0.15625$$

$$(0.0025) \times (3588) + 0.015625$$

$$n = 560.0781 \quad = 62.33 \quad \Rightarrow \quad n = 62$$

$$8.985625$$

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

SUB CAPITULO I: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.1. ANTECEDENTES

La Constitución Política del Perú de 1979 instituyó el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) como una novedad y por primera vez el Perú incorporó el control constitucional concentrado. Esa constitución establecía en su artículo 296 que el Tribunal de Garantías Constitucionales era el órgano de control de la Constitución y que se componía de nueve miembros (tres designados por el Congreso, tres por el Poder Ejecutivo y tres por la Corte Suprema de Justicia). Asimismo, se establecían los requisitos para ser miembro del tribunal, los cuales eran los mismos para ser vocal de la corte suprema, estos requisitos se encontraba regulado en el artículo 244^a de la Constitución Política del Perú de 1979, que eran los siguientes:

1. Ser peruano de nacimiento,
2. Ser ciudadano en ejercicio,
3. Ser mayor de cincuenta años,
4. Haber sido magistrado de la Corte Superior durante diez años o haber ejercido la abogacía o desempeñado cátedra

universitaria en disciplina jurídica por un período no menor de veinte años.

Otro aspecto de importancia es la competencia del TGC, la cual fue fijada por el artículo 298.º de la Constitución de 1979 que estableció:

Artículo 298.- El Tribunal de Garantías tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Es competente para

1.- Declarar, a petición de parte, la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravinieran la Constitución por la forma o por el fondo;

2.- Conocer en casación las resoluciones denegatorias de la acción de hábeas corpus y la acción de amparo, agotada la vía judicial.

Sin embargo, después de iniciada sus funciones el tribunal fue criticado, así tenemos al jurista Eguiguren (1991) quien sostiene que :

Una evaluación objetiva de la tarea desplegada por el TGC en sus ocho años y medio de funcionamiento, arroja sin duda un balance más bien desfavorable sobre su gestión. No es exagerado afirmar que muchas de las expectativas que se cifraron en el tribunal han quedado defraudadas y que los males que se quisieron corregir con su creación no han sido significativamente superados. (pág.53)

Asimismo, Landa (2007) expresó su valoración sobre el TGC:

En definitiva, la valoración de la jurisdicción constitucional, si bien se enmarca en la propia crisis de maduración democrática del Estado constitucional peruano, podemos concluir que el TGC cumplió un tímido rol como órgano de control de la Constitución. En efecto, jugó un opaco papel en la fiscalización de la constitucionalidad de las leyes y realizó una mínima labor de control constitucional de tutela judicial de los derechos fundamentales. (pág. 167)

Un hecho tallado en nuestra historia nacional es el golpe de estado del 5 de abril de 1992, hecho que fue repudiado por la comunidad internacional obligándose el gobierno a dictar una nueva constitución, con miras a restablecer la democracia. En este contexto histórico se hicieron los debates sobre la continuidad del Tribunal de Garantías Constitucionales,

Torres (1993) planteó su modelo de Poder Judicial que suponía que:

Las Cortes Superiores y las Cortes Supremas deben ser distribuidas por Provincias Judiciales. La Corte Suprema Nacional solo debe atender los casos relativos a los derechos constitucionales. Esta distribución de funciones permitirá descentralizar la justicia no solo para agilizarla sino para que la jurisprudencia responda mejor a la realidad y a la equidad en vez de principios simplemente abstractos captados de realidades externas y uniculturales (pág. 201)

Sin importar, el apoyo a esa misma propuesta la Alianza Nueva Mayoría cambio 90, asimismo en los trabajos de la comisión de constitución del CCD, el constituyente César Fernández Arce, en la 36.^a sesión del martes 30 de marzo de 1993, bajo la presidencia del señor Carlos Torres y Torres Lara, argumentó que:

Entre las reformas más importantes está la de incorporar a la Corte Suprema un Tribunal de Garantías Constitucionales integrado por vocales supremos, cuyos nombramientos estarían desligados, por completo, del Poder Ejecutivo y Legislativo. (pág. 143)

Si en caso los debates hubiesen culminado ahí, actualmente tendríamos un tribunal dentro de la Corte Suprema de Justicia, es decir dentro del poder judicial, sin embargo, en la 38.^a sesión del jueves 1.º de abril de 1993, bajo la presidencia del señor Carlos Torres y Torres Lara, se escuchó la opinión del invitado, Manuel Aguirre Roca, ex magistrado del TGC,²³ sobre el balance del funcionamiento del TGC, quien en aquella oportunidad dijo:

El señor MANUEL AGUIRRE ROCA se refirió en primer término a los orígenes de los Tribunales Constitucionales, independiente del Poder Judicial, e indicó que al haberse introducido esta institución en el Perú, con la Constitución de 1979, era conveniente someterlo a evaluación para determinar su subsistencia.

Dijo que [...] no hubo resultados óptimos en un principio, por falta

de experiencia y, luego, por situaciones políticas.

Expresó, asimismo, que debía mantenerse la existencia de un órgano con estas facultades. El problema es una ley que sea menos defectuosa que la primitiva, básicamente en lo que se refiere a las formas de designación de los magistrados, a la posibilidad de reelección que considera peligrosa, a la edad que deben tener los magistrados y a los requisitos que deben cumplir, impidiendo que gente muy capaz y joven llegue al Tribunal y la reelección sea una tentación para congraciarse con el elector.

Continuando su exposición manifestando que para la nueva ley habría que reformar el estatuto del Tribunal, ampliar algunas facultades y recortar otras, establecer un sistema de designación distinto y períodos diferentes; [...]

En su conclusión, manifestó que no debe suprimirse el Tribunal de Garantías Constitucionales (pág. 157)

Como consecuencia de la participación de el constitucionalista Aguirre roca y García Belaunde se restituyo el tribunal y se estableció en nuestra actual constitución de 1993.

1.2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993

A diferencia de la constitución de 1979, que llamaba a este órgano de control de la constitución como Tribunal de Garantías Constitucionales; nuestra constitución vigente la denomina Tribunal Constitucional.

El tribunal constitucional, en nuestra actual constitución se encuentra desarrollado de forma primordial en dos artículos 201º y 202º, en los cuales se han desarrollado su concepto, funciones, el número, requisito, y forma de elección de los magistrados, asimismo, sobre sus competencias.

En base al art. 201º: *-El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente*”, de ello, se puede inferir que el Tribunal constitucional es el órgano encargado de realizar un control de constitucionalidad, es decir que la normatividad y las actuaciones estatales y privadas estén en concordancia con la constitución. Así mismo, lo caracteriza como autónomo e independiente, pues no tiene ningún nexo funcional, ni dependencia de algún poder u órgano del Estado.

El mismo artículo señala que los miembros del Tribunal Constitucional, serán elegidos por el periodo de 5 años, en cuestión a los requisitos el art. 201, establece que:

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata.

Sobre la responsabilidad y forma de elección de los miembros del tribunal, y el número de votos necesarios para su elección el artículo 201º establece que: *-Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros*ll. Asimismo, sobre la limitación para ser miembro del tribunal constitucional el art. 201º establece que: *No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación.*

Sobre las competencias del tribunal constitucional el actuar de nuestra vigente constitución, es regulada por el artículo 202º, que regula las siguientes competencias:

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.

Por último, sobre las sentencias de inconstitucional, que emite este Tribunal Constitucional tenemos el art. 204º establece que: *La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda*

sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.

1.3. CONCEPTO

El tribunal constitucional, según la doctrina puede también ser catalogado como -corte constitucional. Así tenemos a Highton (2008), quien refiere que: Un tribunal o corte constitucional es aquel órgano que tiene a su cargo, principalmente, hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución de revisar la adecuación de las leyes — y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del Poder Ejecutivo— a la Constitución (pág. 108). Por otro lado, Favoreu (1994) define al Tribunal Constitucional como: *-una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos” (pág. 13)*

Asimismo, en base a nuestra constitución podemos definir al tribunal como un órgano constitucional, autónomo e independiente encargado del control de la Constitución.

1.4. CARACTERÍSTICAS

Para el tratadista Javier Pérez Royo las características de los tribunales constitucionales son las siguientes:

1. Es un órgano único, en el que se concreta la interpretación definitiva y vinculante de la Constitución.

2. Es un órgano jurisdiccional, aunque no integrado en el Poder Judicial.

3. Su competencia básica consiste en el control constitucional de las leyes.

4. Sus competencias adicionales van en la misma dirección: protección de los derechos fundamentales, protección de la distribución territorial del poder y, protección de la división de poderes. (pág. 935)

En base a la doctrina y a nuestra constitución el tribunal constitucional presenta las siguiente:

Órgano constitucional: Por su origen constitucional

Órgano autónomo: La propia constitución de la autonomía.

Órgano independiente: No tiene dependencia ni subordinación de otro organismo o autoridad

Órgano político: las cuestiones que soluciona tienen un matiz político.

Órgano jurisdiccional: cumple o indican decisión y tiene su propia organización funcional y orgánica.

Órgano especializado: Resuelve sobre asuntos de especialidad, asuntos constitucionales (primacía de la constitución y tutela de derechos)

1.5. NATURALEZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sobre la naturaleza de este órgano constitucional existen posturas que la entienden como un órgano estrictamente judicial o jurisdiccional, hay otros que señalan que tienen una naturaleza política con cierto cariz legislativo, y algunos señalan una naturaleza administrativa. Estas posturas se deben a cuestiones funcionales, aspectos que son insuficientes para entender de forma clara la naturaleza del Tribunal Constitucional.

Asimismo, en base a su concepción constitucional e histórica de protector de la supremacía constitucional y del principio de separación de poderes, el tribunal puede ser entendido como un órgano constitucional, jurisdiccional y colegiado

1.5.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL

El tribunal constitucional puede ser entendido en primer término como órgano constitucional por su regulación constitucional, en consecuencia, cabe señalar sobre los órganos constitucionales, los cuales son esenciales para la existencia y funcionamiento del Estado constitucional y son creados directamente por la Constitución.

Por lo tanto, para poder analizar esta naturaleza de órgano constitucional, podemos recurrir a García (1981) quien señala que: *-Los órganos fundamentales del Estado no pueden ser otros que aquellos que reciben directamente de la Constitución su status y competencias esenciales a través de cuyo ejercicio se actualiza el orden jurídico*

político fundamental proyectado por la misma Constitución” (pág. 13).

Asimismo, Caballero (2000) señala que los órganos constitucionales se caracterizan porque:

Son creados de manera expresa por el poder constituyente en la Constitución; son órganos técnicos altamente especializados; son independientes funcionalmente de los poderes del Estado; los titulares son elegidos o designados por los poderes públicos o residualmente por gremios o entidades privadas; gozan de autonomía administrativa, presupuestal y normativa, básicamente; los titulares gozan de prerrogativas e inmunidades para la determinación de sus responsabilidades; sostiene con los poderes y gobiernos descentralizados relaciones de coordinación; y, son entidades públicas con competencias de cobertura nacional. (pág. 153)

En consecuencia, se puede señalar que un órgano constitucional está caracterizado por los siguientes elementos:

- La constitución es su creadora
- No están sujetas a un orden de división funcional de poderes
- Todos los órganos constitucionales tienen la misma jerarquía
- Mantienen una independencia de sus pares
- Su función y competencia son de carácter nacional
- Presentan una autonomía en el aspecto normativo y funcional.

Se puede disgregar de nuestra regulación constitucional (art. 201º-202º) que el Tribunal Constitucional es un órgano creado por nuestra constitución, lo cual determina como función el control de la constitución brindándole para ello autonomía e independencia. Asimismo, el mismo tribunal Constitucional ha señalado al respecto que:

En efecto, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, no es uno más y esa es su principal función. Es autónomo e independiente y sólo está limitado por la Constitución, de la cual es su custodio y garante, porque así lo decidió el Poder Constituyente que le encomendó tal tarea. Por tanto, si bien como órgano constitucional no es superior a los Poderes del Estado ni a otros órganos constitucionales, tampoco está subordinado a ninguno de ellos, pues es autónomo e independiente, y sus relaciones se dan en un marco de equivalencia e igualdad, de lealtad a la Constitución, de firme defensa de la democracia y de equilibrio. En efecto, en nuestra época el equilibrio no es solo entre poderes del Estado, puesto que las Constituciones modernas han creado órganos constitucionales autónomos que antes no existían. Tal principio también debe regir las relaciones entre los poderes del Estado y los órganos constitucionales y de estos últimos entre sí. (STC Exp. N.º 00047-2004-AI/TC, 2006, fund. 33.)

1.5.2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO JURISDICCIONAL

Gran parte de la doctrina, en base a las facultades de carácter político, pues junto al principio de supremacía constitucional protege el principio de separación de poderes. Considera que el tribunal constitucional tiene una naturaleza política, Carpizo (2009) señala que:

La labor del Tribunal Constitucional constituye por esencia una función política, enmarcada dentro de la Constitución, que se actualiza a través de la jurisdicción y con técnicas, metodologías y parámetros jurídicos, sin desconocer los aspectos valorativos y axiológicos en su interpretación. (Pág. 44)

Asimismo, el jurista nacional Landa (2011) afirma que: *“El Tribunal Constitucional, si bien es un órgano jurisdiccional, se diferencia de la actividad del Poder Judicial, por cuanto la jurisdicción constitucional entra dentro del dominio de lo político”* (pág. 44)

Pero cabe la interrogante: ¿Por qué la doctrina aun considera que el Tribunal Constitucional es un órgano político?, para despejar esa duda podemos citar a Garcia de Enterria (1994), quien señala que:

Es, pues, cierto que el Tribunal decide conflictos políticos, pero lo característico es que la resolución de los mismos se hace por criterios y métodos jurídicos, y esto no sólo formalmente, según la famosa objeción de Schmitt (la justicia constitucional como política justizförmig o en forma judicial), sino materialmente, administering the law by processes of rigorous legal logic, administrando el Derecho por cauces de rigurosa

lógica jurídica, o, en términos del juez Frankfurter, esforzándose por alcanzar «the achievement of justice between man and man, between man and state, through reason called law» (la realización de la justicia entre hombre y hombre, entre hombre y Estado, por medio de la razón llamada Derecho).

Si bien es cierto que, algunos doctrinarios aun encuentran una disyuntiva entre el carácter político o jurisdiccional del Tribunal constitucional, autores como Ferrer (2004) definen al Tribunal Constitucional como: *-el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental*” (pág. 37). Para apoyar esta postura el jurista nacional Pérez (2006) señala que:

Se trata, no obstante, de un órgano que realiza una auténtica función jurisdiccional, esto es:

- a) Resuelve conflictos de acuerdo a Derecho ya que el Tribunal Constitucional está sujeto solamente a la Constitución y a su Ley Orgánica (art. 1.1 LOTC), y*
- b) Lo hace desde una posición de plena independencia, que se predica tanto del órgano como de cada uno de sus integrantes individualmente considerados. (pág. 21)*

El hecho de que se considera al Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional, puede confundir y hacer creer que este Tribunal pertenece

al Poder judicial, sin embargo, no es así. En esta misma postura Trujillo (2012) señala que:

El hecho de que la actividad desarrollada por el Tribunal Constitucional sea de naturaleza jurisdiccional no quiere decir que el Tribunal Constitucional esté dentro del Poder Judicial, pues el Tribunal Constitucional es un Tribunal independiente de los demás órganos constitucionales, único en su orden, extendiendo su jurisdicción a todo el territorio nacional, estando sometido solamente a la Constitución y a su Ley Orgánica. (pág. 118)

Esta afirmación puede corroborarse a revisar la Constitución, debido a que en la estructura orgánica del Poder Judicial no se encuentra ningún rastro del Tribunal Constitucional; asimismo, sus competencias se encuentran detalladas en el artículo 202º de nuestra constitución. Para seguir argumentando en el carácter jurisdiccional del Tribunal, el jurista nacional Prieto (2003) señala que: *“como órgano jurisdiccional, el Tribunal no sólo asume un control de constitucionalidad, sino también el respeto de los derechos fundamentales, precisando su contenido y estableciendo sus límites”* (pág. 217), lo señalado por este autor podría confundir al lector, llevándolo a señalar que el Tribunal Constitucional tiene una similitud o analogía con la justicia impartida por el Poder Judicial, debido a que ambos protegen derechos, ante ello podemos decir que, la diferencia radica en que el Tribunal Constitucional protege derechos fundamentales, en cambio la justicia ordinaria solo protege derecho intersubjetivos.

Por ultimo por la doctrina colombiana tenemos a Martínez (1981) enumera seis razones para afirmar el carácter jurisdiccional de los tribunales constitucionales:

1. La sujeción de su función a un método jurídico de interpretación,
2. El carácter reglado de la acción del tribunal constitucional en cuanto a la actividad de conocimiento jurídico y de oportunidad política,
3. Su actuación que opera sólo a instancia de parte,
4. La vinculación de su actividad a un proceso jurisdiccional especial y contradictorio,
5. Los principios de neutralidad e independencia a que está sujeta la actividad jurisdiccional; y,
6. Su posición de tercero súper partes. (pág. 1974 y ss.)

1.5.3. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ÓRGANO COLEGIADO

Sobre naturaleza de órgano colegiado, podemos referir que este tiene su base en el artículo 201° de la Constitución, en donde se regula que el Tribunal Constitucional se compone de siete miembros elegidos por cinco años. En consecuencia, debido a la existencia de más de un magistrado el tribunal constitucional puede ser catalogado como un órgano constitucional colegiado, por lo tanto, la dirección y gestión de

este tribunal está a cargo de pluralidad de voluntades, en el caso del tribunal constitucional de siete magistrados.

En consecuencia, podemos mencionar que existe una voluntad de colegiado en el Tribunal constitucional, la cual en palabra de Morales (2014) se puede expresar:

La voluntad del colegiado se puede expresar por mayoría o por consenso. En el segundo caso, el consenso de los magistrados, en el ámbito jurisdiccional, se puede justificar en dos razones:

- a) Porque un requisito del debido proceso es la motivación de las resoluciones, lo que obliga a conversar sobre la ratio decidendi ya que debe ser compatible con la Constitución, y
- b) Porque el TC no solo y exclusivamente declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o normas con rango de ley, sino que también, en algunos casos, al dictar sentencias interpretativas está obligado a justificarlas. (pág. 80)

En consecuencia, para entender esta naturaleza del Tribunal es necesario analizar lo que refiere la Constitución de los miembros del Tribunal Constitucional, nuestra Carta Magna en su artículo 201º señala que: «*Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema*». Para ello recurrimos a nuestra constitución, que en su artículo 147º que para ser vocal de la Corte Suprema, dispone:

Artículo 147.- Para ser magistrado de la Corte Suprema se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento;
2. Ser ciudadano en ejercicio;
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años;
4. Haber sido Magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.

Asimismo, por ser un órgano constitucional colegiado el tribunal constitucional, requiere un quorum para realizar sus funciones, para entender ello podemos recurrir a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que en su art. 5º, dispone que:

Artículo 5.- El quórum del Tribunal Constitucional es de cinco de sus miembros. El Tribunal, en Sala Plena, resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos en los que se exigen cinco votos conformes.

De no alcanzarse la mayoría calificada de cinco votos a favor de la inconstitucionalidad de la norma impugnada, el Tribunal

dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad.

En ningún caso, el Tribunal Constitucional deja de resolver. Los Magistrados son irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto por causal de decoro. Los Magistrados tampoco pueden dejar de votar, debiendo hacerlo en favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos de voto y los votos singulares se emiten juntamente con la sentencia.

La exigencia de un quorum parece desventajosa o innecesario, pues con la falta de tres magistrados no podría realizarse las sesiones del tribunal, sin embargo, esto se encuentra reglamentado así como el objetivo que el criterio mínimamente de 5 magistrados se pueda emitir una sentencia razonable, proporcional y en el marco de la constitución. Sobre esa misma línea de opinión Morales (2014) señala que: *Siendo el TC un órgano colegiado, el quorum para sesionar constituye una garantía para que más de la mitad de magistrados participen en el debate para la toma de la decisión y con ello se adopte un fallo que goce de la legitimidad del colegiado. (pág. 90)*

1.6. FINALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Desde su origen en el año 1920 en Austria, los tribunales o cortes constitucionales han tenido dos finalidades primordiales: defender la Constitución y proteger los derechos fundamentales de las personas.

Su primera finalidad, es la del control o defensa de la constitución, debido a que tiene como función ubicar los actos y las normas inconstitucionales, es decir, actos y normas que no se encuentran en consonancia de la constitución, con el objetivo de expulsarlas del ordenamiento jurídico. Asimismo, lo característico de un sistema normativo constitucional originado por un órgano constituyente, es la existencia de un órgano constituido que proteja su constitucionalidad.

Su segunda finalidad, es la defensa o protección de los derechos fundamentales de la persona, que implica la realización de dos actividades: a) Reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, b) ejecutar mecanismos de protección (proceso de garantías constitucionales).

1.7. PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL

En ese acápite desarrollaremos los pilares axiológicos que utiliza el tribunal constitucional en su actuar, es decir, en base a que cumple sus funciones el tribunal constitucional. Debido a que una actuación tan importante la realizada por el tribunal constitucional no puede ser llevada a cabo solo en base a la voluntad y conocimiento de los magistrados, es ante esta situación que aparecen los principios de actuación del Tribunal constitucional, la cuales serán desarrollados a continuación:

1.7.1. IMPARCIALIDAD

Nuestra constitución vigente no reconoce de forma expresa el principio de imparcialidad, sin embargo, el tribunal constitucional en su labor creadora de jurisprudencia, ha señala que:

Mientras la garantía de independencia, en términos generales, protege al juez frente a influencias externas, el principio de imparcialidad –estrechamente ligado al principio de independencia funcional– se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones:

- a) Imparcialidad subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda tener con el caso.
- b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. (Exp. N.º 0023-2003-AI/TC)

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha mantenido ese criterio en otra jurisprudencia, que lo ha llevado a señalar que:

Mientras la garantía de la independencia, en términos generales, alerta al juez de influencias externas, la garantía de la

imparcialidad se vincula a exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y el objeto del proceso mismo. De este modo, ambas deben ser entendidas como una totalidad, por lo que no puede alegarse el respeto al principio de independencia mientras existan situaciones que generen dudas razonables sobre la parcialidad de los jueces. (Exp. N.º 2465-2004-AA/TC)

A nivel de normativa internacional, tenemos al numeral 1 del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

En la jurisprudencia internacional, la CIDH, ha señala que:

La imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan

albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. (Corte IDH, Caso Usón Ramírez versus Venezuela)

1.7.2. RESPETO DEL DEBIDO PROCESO FORMAL Y MATERIAL

El fundamento para la actuación de los magistrados en consonancia con el debido proceso, tiene su base en el artículo 139º, inciso 3 de la constitución y el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El artículo 139º, inciso 3, de la Constitución Política del Perú dispone:

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

[...]

3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su definición.

En análisis de la misma constitución, el tribunal ha señalado respecto al debido proceso que:

a) El derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado. Constituye

los principios y reglas elementales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos.

b) Que es un derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo de estos. (Exp. N.º 0090-2004-AA)

Respecto al debido proceso formal y material el tribunal constitucional ha señalado que:

El Tribunal Constitucional del Perú ha diferenciado el debido proceso formal del debido proceso material. Al respecto, tiene dicho que, con relación al primero, lo integran los principios y reglas que tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. Mientras que, en su faz material, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. (Exp. N.º 8125-2005-HC)

1.7.3. CARÁCTER JURISDICCIONAL DE SU ACTUACIÓN

En base al art. 1º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional, solo se encuentran sometidos a

la Constitución y Ley Orgánica del Tribunal en el desarrollo de sus funciones; asimismo, no se encuentran sujetos a mandato imperativo ni reciben instrucciones de ninguna autoridad. En esa misma línea de opinión Morales (2014) señala que: *-el Tribunal Constitucional un órgano jurisdiccional, corresponde a sus integrantes conducirse como jueces de la Constitución de manera independiente e imparcial al igual que los jueces del Poder Judicial” (pág. 130)*

Por otro lado, Los magistrados del Tribunal Constitucional también deben guiar su actuación conforme a los Principios básicos relativos a la independencia de la *judicatura de Naciones Unidas. En ese sentido, el principio 2. ° dispone:*

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

2.1.1. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

En comentario a este tema Morales (2014) señala que:

Los magistrados del Tribunal Constitucional deben guiar su actuación por el principio de supremacía constitucional. Dicho principio, estrechamente relacionado con el principio de jerarquía jurídica, está consagrado en el artículo 138° de la Constitución peruana que dispone: «[...] En todo proceso, de existir

incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera» (pág. 132)

La supremacía de la constitución supone que la constitución prevalece sobre otro tipo de normas, así lo refiere, García de Enterría (1994), refiriéndose al principio de supremacía constitucional, señaló que *“la Constitución no sólo es una norma, sino precisamente la primera de las normas del ordenamiento entero, la norma fundamental, lex superior”* (pág. 47)

2.1.2. PRINCIPIO DE PROTECCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La protección de los derechos fundamentales, es considerado como una de las principales misiones del tribunal constitucional, pues esta debe velar por su plena vigencia. Esta protección tiene su origen en el artículo 44º de nuestra constitución que establece que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, esta obligación del estado la materializa el Tribunal constitucional, mediante los procesos constitucionales de amparo y habeas corpus. Asimismo, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que : *-Los poderes públicos, en general, tienen un deber especial de protección de los derechos fundamentales de la persona. Tal deber de protección exige la actuación positiva de aquéllos”* (Exp. N.º 05637-2006-PA/TC, Fundamento 11)

2.1.3. PRINCIPIO DE RESPETO DE LOS DERECHOS INTERNACION DE DERECHOS HUMANOS

Este principio de actuación, que supone que el Tribunal Constitucional debe actuar en base a los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia que emiten los órganos de garantía de tales tratados (tribunales internacionales de derechos humanos) tiene su fundamento en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y del artículo V del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, el Tribunal Constitucional peruano debe interpretar los derechos fundamentales en consonancia con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta obligatoriedad de interpretación acorde ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional peruano, que lo ha llevado a señalar lo siguiente:

12. La vinculatoriedad de las sentencias de la CIDH no se agota en su parte resolutive (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la CDFT de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del CPCConst, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante para todos los

poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal. (Exp. N.º 2730-2006-AA/TC, del 27 de julio de 2006, fundamento 12)

2.2. AUTONOMIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El tribunal constitucional peruano es un órgano jurisdiccional, caracterizado por su autonomía e independencia, así lo estipulan el artículo 201º de nuestra constitución y el art. 1º de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, al tener una naturaleza jurisdicción se le puede subsumir lo estipulado en el artículo 139º, inciso 2: *La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones [...]*”

Sobre este aspecto, López (2004) indica:

En general, se admite que, para que un tribunal constitucional pueda desempeñar debidamente sus tareas, sin interferencias de otros órganos, debe disponer de una esfera de autonomía que afecte a ámbitos esenciales de su estructura y funcionamiento. Usualmente se señalan estos ámbitos como integrados por la autonomía reglamentaria, autonomía administrativa, autonomía financiera y autonomía de control o jurisdicción. (pág. 96)

Sobre la independencia judicial, el Tribunal constitucional, ha referido que puede entenderse desde tres ópticas que son las siguientes:

- Como garantía del órgano que administra justicia (independencia orgánica), por sujeción al respeto del principio de separación de poderes.
- Como garantía operativa para la actuación del juez (independencia funcional), por conexión con los principios de reserva y exclusividad de la jurisdicción.
- Como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha independencia. Cabe precisar que en este ámbito radica uno de los mayores males de la justicia ordinaria nacional, en gran medida por la falta de convicción y energía para hacer cumplir la garantía de independencia que, desde la primera Constitución republicana, se consagra y reconoce. (Exp. N.º 00023-2003-AI/TC, fundamento 31)

2. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

2.1. ANTECEDENTES

Una afirmación clara respecto al origen del control de constitucionalidad en el Perú es con la constitución de 1979. Así lo refiere López Flores (2018):

En el caso peruano, el control de constitucionalidad de las leyes a cargo de órganos jurisdiccionales es una decisión claramente adoptada en la Constitución de 1979. En mi concepto, son tres las etapas del control constitucional en la historia del Perú republicano: la primera, de control político (inicios de la

República hasta 1920); la segunda, de aproximación a un modelo jurisdiccional de control constitucional (1920 a 1979); y, finalmente, de un modelo jurisdiccional de control constitucional dual o paralelo (1979 hasta la fecha). (pág. 9)

2.2. CONCEPTO

Sobre el concepto de control de constitucionalidad, Manrique (s.f., pág. 9) señala que puede ser entendido desde los siguientes puntos de vista:

- a) En una comprensión amplia y general comprende el conjunto de mecanismos sociales, políticos, institucionales, comunitarios, individuales y colectivos que se ponen en movimiento para asegurar el respecto de los derechos fundamentales de las personas y la vigencia del orden jurídico político en sus diversos niveles y expresiones (control constitucional social)
- b) En una comprensión menos lata, el concepto de Control Constitucional estaría referido a la actividad de las instituciones del Sistema Jurídico Político realizada con el mismo objeto (control constitucional político o institucional)
- c) Una comprensión más estrecha indicará que el Control Constitucional es ejercido por las Instituciones Judiciales (control constitucional judicial)
- d) Otra, más restringida aún que la anterior, el Control Constitucional es ejercido por los Órganos Jurisdiccionales dentro de los cánones de un proceso judicial (control constitucional jurisdiccional)

2.3. JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL

La jurisdicción constitucional en el Perú nace con la dación de la Constitución Política de 1979, la cual textualmente incorporó al Tribunal de Garantías Constitucionales como de control de la Constitución, aunque sólo tuvo facultades casatorias, teniendo poca producción jurisdiccional durante el tiempo en el que existió bajo dicha denominación. Con la aprobación de la Constitución de 1993, nuevamente los legisladores acogen la regulación de este órgano jurisdiccional bajo el término de Tribunal Constitucional.

El 1º de noviembre de 2004, en el Perú entro en vigencia el Código Procesal Constitucional, que vino a consolidar en un solo texto la normatividad relacionada a los procesos constitucionales (anteriormente recogido en las Leyes Nros. 23506, 25398, 26301, 24968 y 26435). El citado código, trajo no solo la gratuidad de estos procesos, sino que introdujo nuevas herramientas procesales aplicables exclusivamente a esta vía procesal, sino que también permitió reordenar el uso de los procesos constitucionales de tutela de derechos al incluirse la cláusula de residualita como característica intrínseca de los mismos. De esta forma se inició una nueva etapa en la jurisdicción constitucional que ha permitido el desarrollo de una tutela judicial urgente favoreciendo de esta manera la eficacia de los derechos fundamentales al existir un margen más amplio del juez constitucional para hacer eficaz la sentencia.

2.4. SISTEMAS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Existen sistemas políticos, donde no hay jueces sino organismos especiales que trabajan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo un control *a priori*, de alcance general y sin otra relación que el análisis de la legalidad constitucional, y sistemas jurisdiccionales que reconocen opciones diversas. Los dos modelos institucionales primarios del derecho occidental presentan diferencias sustanciales en cuanto al órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad.

2.4.1. REVISIÓN JUDICIAL O *JUDICIAL REVIEW*

El esquema de revisión judicial o *judicial review*, por el cual se deja en manos de los jueces que integran el Poder Judicial la tarea de interpretar y aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de la supremacía constitucional. Este sistema denominado difuso confiere a todos los jueces la tarea de control. O sea que todos los jueces son jueces de legalidad y de constitucionalidad.

Presenta las siguientes características:

- 1) Es un sistema judicial, pues el control recae en los magistrados judiciales.
- 2) Es un sistema difuso, porque todos los jueces –estadales o federales– pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes y actos inferiores. Es decir que el modelo no se adscribe a un órgano específico, sino que, dentro del Poder Judicial, todos los jueces son dotados de idéntica competencia para esta cuestión.

3) El control es incidental, o sea, nace y se desarrolla en el seno de un proceso judicial. La cuestión constitucional no es objeto principal, pero se presenta como una cuestión que ha de ser lógicamente deslindada para la solución del litigio.

4) Rige la noción de —causal, lo que implica que los jueces solamente pueden pronunciarse dentro de los juicios que se planteen ante sus estrados.

5) Los jueces ejercen el control de constitucionalidad en casos concretos y no cuando la cuestión ha devenido abstracta.

6) Los jueces ejercen el control de constitucionalidad a pedido de las partes interesadas y que tengan un interés concreto en la no aplicación de la norma pretendidamente inconstitucional (*standing*).

7) El control de inconstitucionalidad es muy amplio, especialmente considerando la flexible interpretación a la que la ley fundamental estadounidense se ve generalmente sometida.

8) Los tribunales judiciales no ejercen control sobre las cuestiones no justiciables, políticas o actos de gobierno (según lo que ellos mismos han ido calificando como tales).

9) Los jueces se pronuncian sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas en las sentencias, produciendo efectos que, en principio, se circunscriben al caso concreto, pero que en varios otros tienen un alcance más genérico, en virtud de la regla del precedente.

10) La resolución judicial acerca de la constitucionalidad de una norma o de su inconstitucionalidad sólo afecta a las partes (efecto *inter partes*) y los efectos de la declaración en cuestión no se extienden al resto de la norma, que mantiene vigencia en el ordenamiento.

11) La sentencia es declarativa, porque el pronunciamiento de inconstitucionalidad opera como declaración de certeza retroactiva de una nulidad preexistente y, por tanto, con efectos *ex tunc*.

2.4.2. SISTEMA CONCENTRADO

el sistema concentrado del modelo europeo que centraliza el ejercicio del control de constitucionalidad en un único órgano, que no forma parte del Poder Judicial, está fuera de su estructura normativa y se denomina Tribunal Constitucional.

2.4.3. SISTEMA DIFUSO

Pero, aparece, además, en América un tercer modelo, que instala dentro del Poder Judicial a jueces especializados que, actuando como sala dentro del Tribunal Supremo, como corte independiente, o aun situando en el máximo órgano de justicia nacional la función de controlar la constitucionalidad, decide que sea un único organismo el que tenga la palabra final sobre la interpretación constitucional, aun permitiendo el control difuso de los jueces comunes.

2.4.4. DIFERENCIAS

En principio: a) las decisiones de los tribunales constitucionales tienen efectos *erga omnes* (y en muchos casos la ley declarada inconstitucional queda derogada, actuando el tribunal como un legislador negativo), b)

Las decisiones de los jueces en el sistema difuso sólo tienen efectos *inter partes*, aunque pueden llegar a constituir un precedente con fuerza diversa según el caso.

Desde el punto de vista teórico, la diferencia entre un tribunal constitucional y uno ordinario consiste en que, si bien ambos generan y aplican derecho, el segundo sólo origina actos individuales, mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de producción legislativa y al proceder a la anulación de la norma constitucional, no elabora sino que anula una norma general, realiza un acto contrario a la producción jurídica.

2.5. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ

En Perú coexisten el modelo americano y el modelo europeo, pero sin mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse. Se prevé simultáneamente un control judicial difuso para el caso concreto, y un control concentrado en manos de un tribunal *ad hoc* que en acción abstracta puede expulsar del sistema jurídico las normas incompatibles con la Constitución del país.

Y esto, que no es frecuente, tiene su partida de nacimiento en la Constitución peruana de 1979, reiterada en la vigente Carta de 1993. En 1979 se elevó por vez primera a nivel constitucional el precepto de la preferencia que todo juez debía otorgar a una norma superior sobre cualquier otra de menor rango. Es decir, el control difuso. Pero al mismo tiempo, por temor a la poca iniciativa del Poder Judicial, se creó, al margen y fuera del Poder Judicial, un órgano autónomo, no profesional,

que no era instancia, y que seguía el sistema concentrado europeo. Fue creado así el Tribunal de Garantías Constitucionales, de carácter permanente.

Las competencias de este tribunal eran tan sólo dos:

1. Conocer en casación las resoluciones denegatorias de los hábeas corpus y amparo, agotada la vía judicial.
2. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad.

Como puede apreciarse, era el modelo europeo incorporado a un sistema jurídico que conservaba el sistema difuso, sin cruzarse con él, ya que el Poder Judicial retenía el conocimiento y defensa de todos los derechos fundamentales por medio del hábeas corpus y el amparo (tan sólo conocía en casación el tribunal de garantías constitucionales y en caso de resoluciones denegatorias) y el mismo Poder Judicial mantenía el control difuso y de inaplicación de normas.

Así, la jurisdicción constitucional se ejercía en forma paralela por dos entes distintos, que nada tenían que ver entre sí, salvo la eventual coincidencia en aquellas garantías constitucionales que no fuesen acogidas por el Poder Judicial, y que entonces pasaban en casación al Tribunal de Garantías Constitucionales.

La vigente Constitución del Perú de 1993 mantiene en sustancia el modelo, con las siguientes variantes que no alteran su esencia:

1. Adquiere el nombre de Tribunal Constitucional.

2. Sus resoluciones no operan en casación, sino en fallo definitivo, para conocer los instrumentos protectores de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento. Pero, en principio, sólo para las sentencias denegatorias que se dan en tales acciones, pues el resto se mantienen en sede judicial.

3. Resuelve en exclusiva los conflictos de competencia o funciones que tengan o se produzcan en los órganos del Estado que señala la ley.

Es decir que, en Perú, la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial con arreglo a la Constitución y a las leyes, y en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, en ejercicio del control difuso, los jueces deben optar por la primera. Igualmente, en cuanto a la aplicación de una norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. En cuanto a la Constitución, deben guiarse por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial tiene competencia exclusiva para conocer el proceso Constitucional de acción popular (primacía de la Constitución y de la ley respecto al resto de normas de jerarquía inferior a la ley) y los procesos de tutela derechos en primera y segunda instancia.

Además, y en sentido diverso, el Tribunal Constitucional ejerce el control de la Constitución. Por una determinada interpretación de la Constitución pueden ser expulsadas del sistema jurídico algunas leyes, debido precisamente a la imposibilidad de interpretarlas conforme a los preceptos constitucionales, lo cual puede originar, asimismo, la

inconstitucionalidad de otras normas que se encuentren en conexión con tales leyes. Sólo el Tribunal Constitucional puede declarar lo inconstitucional en ultima ratio. La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto pero la decisión no tiene efecto retroactivo (salvo en materia penal en tanto resulte más benigna, y en materia tributaria donde el tribunal puede determinar los efectos).

El tribunal es autónomo e independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.

Conoce:

- En instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
- En instancia única, los conflictos de constitucional competencia, o de atribuciones,
- En última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento, pues la primera y segunda instancia se sustancian ante el Poder Judicial. Asimismo, conoce en las resoluciones estimatorias de derechos que se hayan expedido en contra del orden constitucional. Respecto de decisiones de inconstitucionalidad o que asienten jurisprudencia

constitucional sesiona en Pleno, respecto de decisiones desestimatorias de garantías sesiona por medio de una Sala.

El tribunal constitucional distingue entre doctrina jurisprudencial y precedentes vinculantes con efecto normativo. A diferencia del precedente, la jurisprudencia constitucional no hace alusión a una norma de efecto vinculante general sino a una repetición de criterios normativos contenidos en las sentencias. El tribunal ha establecido que si se desconoce la doctrina jurisprudencial procede el amparo, debido al desacato manifiesto de la doctrina jurisprudencial; en cambio, si se desconoce un precedente, procede el recurso de agravio constitucional, lo cual indica que el precedente tiene efectos similares a una ley.

Según Figueroa (2012, p. 224) Existe una concepción profundamente enraizada, la dinámica y la realidad, características forjadas en los precedentes judiciales, son la esencia del derecho en movimiento. En ese mismo sentido Hakansson (2012, p. 261) Estas instituyen al sistema anglosajón como un modelo de mayor confianza en la tarea de los jueces de impartir justicia y en el cual, en relación con el poder como tal, existe la misma percepción de checks and balances, o tesis de pesos y contrapesos. Esta noción sirve para comprender cómo un poder cualquiera, desarrollando la tesis de Carlos Hakansson, pueda constituir un «potencial freno de los excesos que pudieran cometer el resto (de poderes)».

La tesis del control autónomo es más explícita en García (2011), quien refiere que Kelsen aborda dos tesis claves: «la primera es que la Constitución tiene un significado y un valor jurídico, y que debe ser aplicada jurídicamente. La segunda es que debe existir un órgano ad hoc, al margen de los clásicos poderes del Estado, que pueda ejercer la defensa jurídica de la Constitución contra los que intentan desconocerla».

SUB CAPITULO II: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. PROCESOS CONSTITUCIONALES

1.1. CONCEPTO

Todos los procesos constitucionales llevan como finalidad ofrecer una vía de protección a los derechos fundamentales del hombre que se encuentran afectados. Este encuadre no se restringe a la dimensión de los intereses personales porque admite dispensar la herramienta pertinente a otro tipo de intereses *supra* individuales, como los colectivos, difusos y aun los que representan un sector corporativo. los procesos constitucionales responden a una consigna universal que afianza los derechos humanos, eludiendo el marco procesal que restringe la identificación de los procedimientos judiciales como lucha entre partes donde la verdad se obtiene merced al esfuerzo probatorio de quien afirma.

No se trata en aquellos de obtener una victoria a costa del vencimiento, sino de resolver con la Constitución y demás derechos

contenidos o no en ella, pero que apuntalan y preservan los derechos del hombre.

1.2. CLASES DE PROCESOS CONSTITUCIONALES

Siempre teniendo en cuenta el modelo constitucional al que cada Estado adscribe, se pueden trazar algunas líneas comunes en la caracterización de los procesos constitucionales. Hay tres sectores de atención:

- a)** Los que tienen como finalidad asegurar el principio de la supremacía constitucional;
- b)** Los que garantizan los derechos y garantías individuales
- c)** Los que tutelan y protegen los derechos colectivos y difusos mediante las llamadas acciones colectivas.

En el primer grupo se encuentran las acciones de inconstitucionalidad, sean *directas* (demanda de inconstitucionalidad; acción declarativa de certeza) o *indirectas* (excepción de inconstitucionalidad).

En estas actuaciones no se trata propiamente de un proceso constitucional, salvo en los casos de control concentrado, porque en los sistemas difusos el objeto central resuelve la aplicación o inaplicación de la norma en el caso concreto. De todos modos, los requisitos particulares y las funciones del Juez permiten observar estas actuaciones.

En el grupo siguiente están el amparo (también conocido como mandamiento de seguridad, recurso de protección, acción de tutela,

etc.), el hábeas corpus, la protección de datos personales (hábeas data), las acciones de cumplimiento, entre otras. Finalmente tenemos las acciones colectivas.

1.2.1. PROCESO DE TUTELA DE DERECHOS

1.2.1.1. PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Regulado en el artículo 200º inciso 6 de la Constitución peruana, establece que este tipo de proceso procede *-contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo*, mandato que con la vigencia del Código Procesal Constitucional se tradujo en dos supuestos, siendo el primero de ellos, *el cumplimiento de una norma legal o acto administrativo firme* y el segundo, *el pronunciamiento expreso cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento* (artículo 66º del Código Procesal Constitucional).

El primero de los supuestos implica para el juez constitucional, valorar el incumplimiento inmediato o directo de un mandato que ya tiene identificado a su beneficiario, mientras que el segundo supuesto, le permite al juez constitucional incluso, valorar la inactividad material de la Administración frente al ejercicio de sus funciones que viene lesionando algún derecho fundamental de los administrados (ejemplo, inactividad administrativa con relación a la ejecución de programas sociales).

Cabe precisar adicionalmente, que el Tribunal Constitucional peruano emitió un precedente vinculante sobre los procesos de cumplimiento a razón de precisar el derecho fundamental que este tipo de proceso

brindaba, dado que tanto la doctrina nacional como la jurisprudencia constitucional arraigada con la legislación anterior (que no cabe duda que mantiene fundados argumentos) consideró a este proceso como un proceso constitucionalizado y no propiamente como un proceso de tutela de derechos fundamentales. En ese sentido, el 3 de octubre de 2005, a través de la STC N.º 168-2005-PC/TC (Caso Maximiliano Villanueva), el Tribunal Constitucional peruano estableció que la tutela que brinda este proceso es respecto del *“derecho constitucional a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos administrativos”*.

Asimismo, en la referida sentencia también se procedió a establecer características particulares que debía cumplir la pretensión planteada, a efecto de diferenciar este proceso del proceso contencioso administrativo urgente que en la legislación peruana tiene finalidades similares de tutela. Entonces, a partir del referido precedente, el juez constitucional exige que el mandato invocado como incumplido, sea: a) vigente, b) cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitadamente de la norma legal o del acto administrativo, c) que no esté sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, e) incondicional. Excepcionalmente, si el mandato que se invoca resulta condicional, este podrá ser evaluado en la vía constitucional *“siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria”*. Estos requisitos de procedibilidad, deben ser analizados de modo general frente a los procesos de cumplimiento en la vía procesal constitucional, sin embargo,

adicionalmente a ellos, cuando se judicializa la petición del cumplimiento (o ejecución) de un acto administrativo, también se requiere que éste: a) reconozca un derecho incuestionable del reclamante y b) permita individualizar al beneficiario del mismo.

1.2.1.2. PROCESO DE HÁBEAS DATA

Considerado como una modalidad especial del proceso de amparo, el proceso de hábeas data se encuentra textualmente recogido en el artículo 200º inciso 3) de la Constitución y se encuentra destinado para la protección de dos derechos en particular: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa.

Básicamente, este proceso constitucional se encuentra destinado a otorgar tutela, **en el caso del derecho de acceso a la información pública**, cuando la Administración Pública niegue el acceso a ella sin que justifique dicha negativa en los supuestos de restricción legal legítima (información clasificada: secreta, confidencial y reservada), o se produzca una entrega parcial, fragmentada, desactualizada, imprecisa, falsa, no oportuna o errada de la información solicitada.

En el Perú, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806) que data del 3 de agosto de 2003 y su Reglamento (Decreto Supremo N.º 043-2003-CM) que fue expedido el 24 de abril de 2003, recoge las reglas generales con relación a la política de transparencia, teniendo en la actualidad ya poco más de 10 años de vigencia. Cabe precisar, que la jurisprudencia constitucional ha permitido el avance de las líneas generales básicas para el ejercicio de este

derecho fundamental, emitiendo la STC N.º 1797-2002-PHD/TC (Caso Wilo Rodriguez, publicada el 30 de setiembre de 2003) en donde efectúa por primera el análisis del alcance de la tutela judicial de este derecho a través del proceso de hábeas data.

Por otro lado, cuando se judicializa un hábeas data solicitando tutela del **derecho de autodeterminación informativa**, el ámbito de tutela resulta más amplia dado que con este tipo de proceso, no solo se puede emplazar a la Administración Pública sino también a todo aquel particular que mantenga información personal acopiada a través de una base de datos física o digital, a efecto de que ponga a disposición del titular de este derecho, de manera inmediata y directa, toda aquella información que almacena de él. Aquí es necesario anotar que la legislación que desarrolla el procedimiento para el acceso a datos personales resulta novel, dado que la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733), fue publicada el 3 de julio de 2011, mientras que su reglamento (Decreto Supremo N.º 003-2013-JUS), recién se aprobó el 22 de marzo de 2013, razón por la cual, pese a que este derecho viene recibiendo tutela judicial ya hace más de 15 años, lo mismo no sucede con la tutela administrativa que de manera inmediata toda persona debería recibir del Estado, pues aún no se implementa estructuralmente la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Sin embargo, judicialmente el Tribunal Constitucional al revisar este tipo de casos, ha podido fijar algunas bases respecto de la tutela judicial

que supone el inicio de un hábeas data para acceder a datos personales, estableciendo entre otros casos, la obligación de entrega del record laboral y el certificado de trabajo por parte del empleador hacia el trabajador (STC 1515-2009-PHD/TC), la obligación de entrega de los exámenes médicos anuales que por ley se le practican a los trabajadores por parte del empleador hacia el trabajador (STC 300-2010-PHD/TC), la obligación de las AFPs de entregar el contrato de afiliación u otro documento que acredite la afiliación al Sistema Privado de Pensiones (STC 5745-2009-PHD/TC), la obligación de la Oficina de Normalización Previsional de entregar las constancias de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (STC 6109-2009-PHD), la obligación de las universidades de entregar los certificados de estudios universitarios (STC 746-2010-PHD/TC), el derecho de excluir datos considerados sensibles para el demandante y que no deben ser materia de difusión o registro (STC 302-2010-PHD/TC y 10614-2006-PHD/TC), así como el análisis del pago de costos como parte de la tutela que brinda el proceso de hábeas data frente a la lesión de los derechos materia de tutela por este proceso (STC 2805-2012-PHD/TC).

Asimismo, cabe señalar que con la emisión de la Resolución N.º 06164-2007-PHD/TC, el Tribunal Constitucional establece por primera vez la tipología del proceso de hábeas data, clasificando a este proceso, de acuerdo al tipo de derecho que tutela, en hábeas data puro e impuro.

Dentro del primer grupo, encontramos una subclasificación constituida a su vez, por los hábeas data de cognición y los hábeas data

manipuladores. En cuanto a los hábeas data de cognición (destinado a conocer y supervisar la forma de almacenamiento de datos), encontramos al habeas data informativo (qué se guarda), al habeas data inquisitivo (quien proporcionó los datos), al hábeas data teleológico (las razones del almacenamiento de datos) y al hábeas data de ubicación (donde se encuentra el dato).

Respecto al hábeas data manipulador, hallamos también una subclasificación compuesta por el hábeas data correctivo (modificar datos imprecisos y cambiar o borrar datos falsos), el hábeas data supresorio (elimina información sensible), el hábeas data confidencial (impedir el acceso a personas no autorizadas a información reservada), el hábeas data desvinculador (impedir que terceros conozcan la identidad de los titulares de datos almacenados bajo aspectos generales objetivos como edad, raza, sexo, entre otros), el hábeas data cifrador (cuya finalidad es guardar el dato bajo un código que solo puede ser descifrado por el cifrador autorizado), el hábeas data cautelar (impide la manipulación o publicación del dato), el hábeas data garantista (busca asegurar que las condiciones de seguridad y confidencialidad para el tratamiento de datos resulten eficaces), el hábeas data interpretativo (cuyo objeto es impugnar las valoraciones sobre un dato), el hábeas data indemnizatorio (supuesto que no resulta aplicable por la naturaleza reparatoria del hábeas data, está destinado a solicitar el pago de una indemnización por el daño causado).

En cuanto al hábeas data impuro, solo encontramos al hábeas data de acceso a la información pública.

1.2.1.3. PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

Proceso constitucional que se desprende del artículo 200º inciso 1) de la Constitución Política del Perú y el artículo 25º del Código Procesal Constitucional, que se encuentra destinado para la tutela del derecho a la libertad personal, cuando este ha sido lesionado ya sea por una acción, una omisión o es materia de una amenaza de cierta e inminente realización. Asimismo, también la tutela que brinda este proceso, de acuerdo con lo que dispone el artículo 25º del Código Procesal Constitucional, se amplía hacia los derechos conexos de la libertad, es decir, que puede ser materia de tutela derechos de orden procesal (dentro de un proceso), cuando la lesión o amenaza de afectación se vincule de manera directa al derecho a la libertad individual.

Los supuestos clásicos de procedencia y fundabilidad del hábeas corpus por ejemplo permite identificar supuestos lesivos del derecho a la libertad cuando se produce una detención arbitraria (STC N.º 1924-2010-PHC/TC), o la resolución judicial que dispone el mandato de detención no está suficientemente motivado (STC N.º 6-2010-PHC/TC) o cuando el plazo de detención preventiva ha vencido en exceso (STC N.º 2934-2004-PHC/TC) o cuando se produce la instalación de rejas o cualquier otro medio que impidan el libre tránsito (STC Nros 4893-2011-PHC/TC, 2147-2010-PHC/TC, 3013-2011-PHC/TC, entre otras).

Sin embargo, a estos supuestos clásicos también se ha incorporado una nueva tipología a través de la vigencia del Código Procesal Constitucional, la misma que ha sido complementada a través de la jurisprudencia constitucional, así podemos hallar:

a) habeas corpus restringido, procede frente a la vigilancia del domicilio, seguimiento policial arbitrario o injustificado.

b) habeas corpus correctivo, que viene a ser el medio idóneo para la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos, como lo puede ser la revisión de actos que lesionen algún derecho en el cumplimiento de su condena o incluso en situaciones que impliquen el traslado de un condenado a otro centro carcelario para acceder a tratamientos adecuados para su salud (STC Nros 5559-2009-PHC/TC, 1362-2010-PHC/TC, entre otros).

c) habeas corpus traslativo, que procede contra la mora judicial respecto de la definición de la situación personal de un detenido.

d) habeas corpus instructivo, frente a desapariciones forzadas. Incluye el hecho de que las autoridades emplazadas no expliquen de manera satisfactoria sobre el paradero de la víctima (artículo 32º del Código Procesal Constitucional)

e) habeas corpus preventivo, frente amenaza cierta y de inminente realización.

f) habeas corpus innovativo, supuesto en el cual, pese a que ha cesado la amenaza o violación de la libertad personal, se solicita la

intervención jurisdiccional con la finalidad de evitar la reaparición de la conducta lesiva a futuro.

1.2.1.4. PROCESO DE AMPARO

Proceso constitucional mediante el cual se tutelan todos los demás derechos fundamentales contenidos en la Constitución, incluidos los derechos implícitos y los que se desprenden de la cláusula de *númerus apertus* contenida en el artículo 3º de la Constitución peruana, que no encuentran protección en los procesos de hábeas data, cumplimiento y hábeas corpus. Este proceso se encuentra regulado en el artículo 200º inciso 2) de la Constitución Política y el artículo 37º del Código Procesal Constitucional.

Dado el principio de informalidad procesal y la tutela que se busca brindar a través de los procesos constitucionales a los derechos fundamentales que son denunciados como lesionados, este proceso se constituye como el modelo a seguir en cuanto a las diversas formas de tutela judicial efectiva que se puede y debe brindar a un derecho fundamental, esto en el sentido de que muchas veces la tutela solicitada en el petitorio de una demanda, no resulta la adecuada para brindar una real protección y restitución al derecho invocado. Claro está que esta suerte de *libertad procesal* en cuanto a la forma de emitir un fallo producto, es aplicable a todos los procesos constitucionales por igual, sin embargo, existe una mayor tendencia a aplicarse en los procesos de amparo. Así, por ejemplo, podemos mencionar casos como el de la tutela del derecho al agua potable que por razones técnicas no podía

otorgarse en los términos solicitados (STC N.º 1573-2012-PA/TC), o el caso en donde la posible afectación del derecho al medio ambiente sano y equilibrado, que no podía brindarse requiriendo la paralización de las obras que se venían ejecutando sobre una tubería subterránea de transporte de líquidos industriales desde el mar a la planta de procesamiento (STC N.º 2788-2011-PA/TC), por ejemplo (amparo innovativo).

Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que a través de este proceso se han planteado innumerables conflictos con el Poder Judicial a propósito de la procedencia del proceso de amparo contra resoluciones judiciales emitidas en procesos irregulares (STC N.º 200-2002-PA/TC) o el amparo contra normas legales autoaplicativas (STC N.os 4677-2004-PA/TC, 2736-2004-PA/TC, 4119-2005-PA/TC y, 0579-2008-PA, control difuso de constitucionalidad) o los conflictos con el Jurado Nacional de Elecciones frente a la procedencia de demandas promovidas contra asuntos electorales (STC N.os 5854-2005-PA/TC, 2730-200-PA/TC, entre otros) o los conflictos con el Consejo Nacional de la Magistratura a propósito de plantear demandas contra las decisiones de no ratificación de jueces o fiscales (STC N.os 3361-2004-PA/TC, 1333-200-PA/TC, entre otras), materias todas ellas, para las cuales son aplicables las reglas generales del proceso constitucional.

Cabe precisar que jurisprudencialmente se establecieron reglas específicas para la procedencia del proceso de amparo contra amparo (STC N.º 4853-2004-PA/TC). Así:

- El amparo solo procede frente a una vulneración manifiesta.
- Opera por única vez.
- Su habilitación se encuentra condicionada a la vulneración de uno o más derechos fundamentales.
- Procede frente a sentencias estimatorias como contra desestimatorias.
- Procede en defensa de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional.
- Se habilita a terceros que no hayan participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos se ven lesionados.
- Procede frente a la defensa de precedentes vinculantes.
- Procede también contra una resolución de la etapa de ejecución que puede lesionar un derecho fundamental.
- No procede contra resoluciones del Tribunal Constitucional.

1.2.2. PROCESO DE PRIMACIA DE LA CONSTITUCION

En esta clasificación encontramos al proceso de inconstitucionalidad la cual analizaremos en el siguiente acápite de forma más detallada:

2. PROCESO DE INCONSTITUCIONAL

2.1. CONCEPTO

Una atención exhaustiva al catálogo de procesos que ofrece la justicia constitucional en nuestro país obliga a recalcar nuestra mirada en un proceso con naturaleza sui generis —el proceso de inconstitucionalidad—. Ello debido a que dicho proceso expresa la esencia de la interpretación constitucional a través de las denominadas sentencias interpretativas, en cuanto estas presentan un nivel de vinculación que no podemos soslayar y que manifiestan puntualmente hasta dos marcadas expresiones. De un lado, denotan un nivel de vinculación erga omnes respecto a los efectos de su interpretación y, de otro lado, involucran una también aparente expresión de contradicción en tanto representarían un principio antidemocrático, en la medida que sustentarían decisiones de quienes no han sido elegidos por una vía convencional y, sin embargo, corrigen decisiones de otros poderes del Estado.

El proceso de inconstitucionalidad en realidad trasciende esas aparentes contradicciones en la medida que denota una forma y modalidad de proceso de control normativo. En ningún otro tipo de proceso se expresa este nivel de control, pues no solo identifica un rol de legislador negativo, sino que va más allá e individualiza la potestad de reinterpretar tanto las normas con rango de ley como la Constitución misma.

2.2. CARACTERISTICAS ESPECIALES

a) Procedencia contra normas con rango de ley

Nuestro modelo procesal constitucional determina la procedencia del proceso de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley. Es importante señalar, al respecto, que sus alcances son de carácter general y que carecen de efectos retroactivos. En materia tributaria, sin embargo, se determinan los efectos de la decisión en el tiempo en atención a la necesidad de fijar el marco de las situaciones jurídicas producidas mientras la norma cuestionada estuvo en vigencia. A esta particularidad debemos sumar que con la declaración de inconstitucionalidad ni se reabren procesos concluidos en los cuales se haya aplicado normas declaradas inconstitucionales ni reasumen vigencia las normas legales derogadas. Con lo que concurre, como justificación, una necesaria seguridad jurídica como principio de primacía en una declaración de inconstitucionalidad.

b) Sujetos legitimados para interponer el proceso de inconstitucionalidad

Dentro del rango de sujetos legitimados para interponer el proceso de inconstitucionalidad, se debe destacar una grave omisión en el esquema vigente. No se ha considerado como sujeto legitimado para interponer el proceso de inconstitucionalidad al presidente del Poder Judicial. La Carta Fundamental de 1979 sí contemplaba dicha figura, la cual ha sido omitida en la Carta de 1993 sin una real justificación.

c) Efectos interpretativos erga omnes

Dada su naturaleza como sentencia interpretativa de la Constitución, los efectos del proceso de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos. Problemáticamente, sin embargo, podemos aducir lo siguiente: resulta determinante que la ratio decidendi de la sentencia de inconstitucionalidad resulte in toto vinculante y, sin perjuicio de ello, corresponde cuestionar: ¿son los argumentos obiter dicta en una sentencia de inconstitucionalidad igualmente vinculantes para la comunidad de intérpretes? Esta es una cuestión que exige dilucidación del propio Tribunal, pues el efecto ratio decidendi es, por convención, el extremo vinculante, mientras que el argumento obiter dicta es aquel que resulta solo complementario para la construcción de la decisión. En esa misma línea de ideas, es pertinente destacar que el razonamiento en las sentencias usualmente discurre entre argumentos determinantes y definitivos.

En ese sentido, una práctica válida para determinar el efecto vinculante de las sentencias interpretativas sería que el decisorio de una sentencia fijase cuáles argumentos y cuáles párrafos de la sentencia de inconstitucionalidad, en propiedad, expresan un efecto vinculante erga omnes, respecto del cual el intérprete no se puede apartar. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en aquellas sentencias bien construidas a propósito de precedentes vinculantes. Esta práctica implicaría de suyo una mejor técnica jurisprudencial, pues permitiría una más viable identificación de los extremos vinculantes del razonamiento del Tribunal Constitucional. Lo cual es importante si se tiene en cuenta que no

resulta razonable afirmar que todos los extremos de una amplia decisión representarían un efecto vinculante ni tampoco dejar al libre albedrío del intérprete cuál fórmula de razonamiento adoptar. A diferencia del efecto erga omnes, conviene precisar que el efecto de la interpretación de los jueces del Poder Judicial frente a las incongruencias de una norma con rango de ley frente a la Constitución es inter partes. Es decir, solo podrá determinarse la inaplicación de la norma, más en definitiva no su expulsión del ordenamiento constitucional.

d) Instancia única

Entendemos aquí una necesidad de irrevisabilidad de los criterios expresados en una sentencia de inconstitucionalidad. Si bien es cierto que los rangos, escalas y valores de la interpretación pueden ser múltiples en términos de sujetos y materias, deviene un criterio que podemos manejar que exista una opinión valedera final por sobre las demás instancias. Es cierto que los jueces del Poder Judicial reclaman autonomía e independencia de criterios frente a las potestades correctoras del Tribunal Constitucional y sin perjuicio de ello, admitamos que en el Derecho Comparado igualmente es admitido que la jurisdicción constitucional ejerce funciones revisoras de la jurisdicción ordinaria.

e) Viabilidad de la declaración de inconstitucionalidad por conexión

Una institución de importancia en los procesos de inconstitucionalidad es la figura de la inconstitucionalidad por conexión. Se trata de la declaración de incompatibilidad con el orden constitucional de aquellas normas vinculadas o conexas a una norma que es expulsada del ordenamiento jurídico. Argumentativamente puede describirse esta figura como un fenómeno de suprainclusión, pues si una norma principal es derogada, debemos asumir que las normas vinculadas a ella sufren el mismo efecto de inconstitucionalidad.

f) Improcedencia de medidas cautelares

La aplicación de medidas cautelares en este tipo de procesos es improcedente, a pesar de que en otros tipos no existe prácticamente impedimento alguno, inclusive en el proceso competencial —también un proceso de control normativo—. Dicha improcedencia se debe a que estamos frente a un proceso de control concentrado en puridad a cargo del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. No existe, bajo esa lógica, otra instancia de reexamen de esta decisión, salvo la jurisdicción supranacional. Sin embargo, esta ciertamente no es competente respecto de medidas cautelares, sino de decisiones de fondo y siempre que se cumplan las condiciones predeterminadas, entre otras, de decisión denegatoria en sede nacional, que exista responsabilidad del Estado peruano y que se recurra al sistema interamericano en el plazo de seis meses de concluida la controversia en sede nacional.

2.3. ETAPAS

2.3.1. LEGITIMACIÓN

Analizar la legitimación permite revisar que la demanda de inconstitucionalidad esté siendo presentada por los órganos y sujetos especificados en la Constitución y son las siguientes personas quienes tiene la legitimación para iniciar un proceso de inconstitucionalidad:

a. Presidente de la República

El presidente de la República tiene la función de cumplir y hacer cumplir la Constitución, cometido realizado en su calidad de Jefe de Estado, por lo que cuenta con la mencionada legitimación para obrar en los procesos de inconstitucionalidad

b. Fiscal de la Nación

Dentro de las atribuciones del Fiscal de la Nación se encuentra la habilitación para promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Por tal razón, se le ha reconocido su capacidad para interponer demandas de inconstitucionalidad.

c. Defensor del Pueblo

La Defensoría del Pueblo tiene como competencia defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

d. Congresistas

La democracia constitucional asegura a favor del Parlamento -y, especialmente, de sus minorías parlamentarias- una serie de facultades institucionales mediante las cuales puede controlar y fiscalizar al poder público. Si algo caracteriza al control parlamentario es la simple oportunidad de su ejercicio. No existe, por tanto, ningún ‘deber’ de realizar control político alguno, quedándoles siempre la posibilidad del control a través del proceso de inconstitucionalidad. Bajo este presupuesto, y como los congresistas representan a la nación, se admite que un grupo de ellos puedan interponer demandas de inconstitucionalidad.

e. Presidentes regionales y alcaldes provinciales

La Constitución también ha reconocido la posibilidad de interponer demandas de inconstitucionalidad a los más altos funcionarios de los órganos ejecutivos de los gobiernos subnacionales. La legitimidad activa recae en los presidentes regionales y los alcaldes provinciales, en tanto representantes de los gobiernos regionales y locales, respectivamente.

f. Colegios profesionales

Los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, cuya actuación social y colectiva ha de ser compatible con el ejercicio de las potestades y competencias de los poderes públicos. No son figuras ajenas -menos aún contrarias- a las previsiones constitucionales, toda vez que son una garantía, frente a la sociedad, de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional.

g. Ciudadanos

Según la propia Constitución, todos los peruanos estamos obligados a respetarla, cumplirla y defenderla. Así pues, los ciudadanos están en capacidad de discernir si, a través de un grupo, se plantea una demanda de inconstitucionalidad.

2.3.2. PROCEDIBILIDAD DE LA DEMANDA: RANGO DE LA NORMA INPUGNADA:

En base al art. 200, numeral 4, las normas con rango de ley son las siguientes: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales

La protección que procura el proceso de inconstitucionalidad a la Norma Fundamental se produce especialmente por intermedio de la protección de la jerarquía normativa, tal como se expresó supra. Conforme a esta categoría -propia de la validez de la justicia constitucional- la norma inferior será válida solo en la medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma superior. A partir de la jerarquía normativa, en el proceso de inconstitucionalidad se protege a la Constitución frente a normas con rango de ley.

El término 'rango' denota la posición que una fuente formal del derecho pueda ostentar en el ordenamiento jurídico. La fórmula 'rango de ley' indica que las fuentes a las que se ha calificado como tales, se

ubican en el ordenamiento en el grado inmediatamente inferior al que ocupa la Constitución y que solo las fuentes que ocupan esa posición en el ordenamiento jurídico pueden ser impugnadas en el proceso de inconstitucionalidad.

Para cuestionar una norma con rango de ley, se requiere que esta esté vigente y sea válida, accesible y previsible.

- Tal como explicamos más adelante, será vigente si es que no ha sido derogada, modificada o haya terminado el plazo de vigencia en ella misma establecida.

- Una norma es válida si ha sido creada conforme al íter procedimental que regula el proceso de su producción jurídica (competencia y procedimiento (validez formal), y siempre que no sea incompatible con las materias, principios y valores expresados en normas jerárquicamente superiores (validez material).

Con el objeto de determinar si una norma con rango de ley forma parte del ordenamiento jurídico, el análisis está sujeto a la constatación de si esta norma fue introducida respetándose el procedimiento establecido en la Constitución. En el caso de la ley, una de sus fases es la promulgación por el presidente de la República o, en su caso, por el presidente del Congreso de la República, los que a su vez ordenan su publicación en el diario oficial para que esta adquiera obligatoriedad.

- Según la accesibilidad, el individuo debería conocer que los supuestos de la norma le son aplicables.

- Por la previsibilidad, las normas legales deberán estar prescritas con la conveniente precisión como para que se adopte, respecto a ellas, conducta adecuada y prever los efectos de su transgresión.

2.3.3. PRETENSIÓN DE LA DEMANDA

Como el proceso de inconstitucionalidad implica un control abstracto de constitucionalidad de normas con rango de ley, es preciso determinar en la demanda de qué forma se concretiza el objetivo de protección de la jerarquía de la Norma Fundamental que se busca a través de pretensiones específicas. El objeto litigioso en el caso de la inconstitucionalidad, como en cualquier otro proceso, está constituido por dos elementos:

- La causa petendi, que está constituida por la indicación y la determinación del hecho constitutivo de la demanda, además de la infracción que determina el interés de obrar en juicio; es la razón, por qué o, más exactamente, el título de la demanda.

- Frente a ella, el petitum consiste en la solicitud de una resolución idónea para la realización de un control jurisdiccional de constitucionalidad de normas con rango de ley.

2.3.3.1. CAUSA PETENDI: PROTECCIÓN FRENTE A INFRACCIÓN A LA JERARQUÍA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN

Ante todo, es preciso determinar cuál es la causa petendi de los legitimados activos que plantean una demanda de inconstitucionalidad, sobre la base que este proceso tiene como objetivo primordial el respeto de la jerarquía normativa de la Constitución. En vista de tal finalidad de control, es necesario precisar cuáles son los tipos de infracciones que pueden ser objeto de control.

Infracciones de acuerdo con su carácter

En primer lugar, se ha determinado que la violación de la Constitución puede ser por la forma y por el fondo.

Son diversos los temas tratados a lo largo de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional a partir de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas, pero en primer lugar es importante diferenciar entre las que se cuestionan temas formales (procedimientos de aprobación de normas con rango de ley) y las que expresan claramente que por el fondo dichas normas son contrarias a la Constitución.

Infracción por la forma

Un vicio de inconstitucionalidad formal es entendido como una violación de las normas procedimentales o del íter legislativo. Son tres los supuestos en los que se configura este tipo de infracción:

- Quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en la Constitución
- Tratamiento de una materia reservada directamente por la Constitución a otra fuente formal específica del derecho.
- Expedición de norma por un órgano constitucionalmente incompetente para hacerlo.

Infracción por el fondo

Se produce infracción por el fondo cuando la materia regulada por la norma con rango de ley resulta contraria a algunos de los derechos, principios y/o valores constitucionales, es decir, cuando resulta atentatoria de las normas sustanciales reconocidas en la Constitución.

No es válida la tesis según la cual, al obedecer la restricción de la norma impugnada a una ‘decisión política del legislador’, esta no podría ser evaluada mediante un ‘juicio de constitucionalidad’. Esta aseveración no puede pasar inadvertida, fundamentalmente porque el Tribunal Constitucional entiende que detrás de tal planteamiento podría existir una negación de la función trascendental que la Constitución le ha confiado, y que no es otra que la de ser el ‘órgano de control de la constitucionalidad’; y porque admitiéndola o guardando silencio, podría entenderse que las decisiones adoptadas por el legislador bajo ‘criterios políticos’, se encontrarían excluidas del control jurisdiccional, es decir, se

estaría admitiendo, en forma genérica, la existencia de ‘cuestiones políticas no justiciables’.

Infracciones de acuerdo con el quantum de la fuente lesiva

Esta clasificación se encuentra referida a un quantum de la norma con rango de ley que se presenta como fuente lesiva, no del grado de afectación de la fuente paramétrica. Puede ser de dos tipos: total o parcial.

Infracción total

La infracción total a la jerarquía normativa de la Constitución se origina cuando la totalidad de su contenido dispositivo o normativo es contrario a la Constitución. En tales supuestos, si la demanda de inconstitucionalidad es declarada fundada, ‘toda’ la disposición impugnada queda sin efecto.

Infracción parcial

Existe infracción parcial cuando solo una fracción de su contenido dispositivo o normativo resulta inconstitucional. Son dos las situaciones especiales en que se produce este tipo de infracción:

- En caso de que el vicio parcial recaiga sobre su contenido dispositivo -texto lingüístico del precepto- serán dejadas sin efecto las palabras o frases en que aquél resida.
- Si el vicio recae en parte de su contenido normativo, es decir, en algunas de las interpretaciones que pueden ser atribuidas al texto del precepto, todo poder público quedará impedido, por virtud de la

sentencia del Tribunal Constitucional, de aplicarlo en dichos sentidos interpretativos.

Infracciones de acuerdo con el parámetro utilizado

A diferencia de la anterior clasificación en la que el centro de atención recaía en la norma objeto de cuestionamiento constitucional, en ésta se analiza el parámetro normativo utilizado, es decir, la fuente afectada, como es la Constitución o el bloque de constitucionalidad.

Infracción directa

Se trata de aquellos supuestos en los que el parámetro de control de constitucionalidad, se reduce únicamente a la Norma Fundamental.

Infracción indirecta

En este supuesto de infracción, la invalidez constitucional de la norma impugnada no queda acreditada con un mero juicio de compatibilidad directo frente a la Constitución, sino luego de una verificación de su disconformidad con una norma legal que sirve excepcionalmente como parámetro de constitucionalidad. Esto es lo que se conoce como bloc de constitutionnalité o 'bloque de constitucionalidad', concepto a ser explicado con detenimiento más adelante.

Infracciones de acuerdo con el tipo de acción

Según la actuación de quien atenta contra la jerarquía normativa de la Constitución, las infracciones contra ésta pueden ser por comisión o por omisión.

Infracción por comisión

Éstas son las infracciones clásicas, que se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico constitucional. Implica que se haya emitido una norma con rango de ley que vulnere la jerarquía normativa de la Norma Fundamental.

Infracción por omisión

También se ha establecido que puede existir infracción por omisión, aunque no ha sido especialmente invocado según se observa en el gráfico antes presentado.

La doctrina constitucional ha reconocido que no solo es posible el control de las actuaciones positivas del legislador a través de emisión de normas con rango de ley, sino que también se vuelve necesaria la vigilancia de su desidia o inacción, cuando dicha inactividad viene ordenada por imperio de la Constitución. Aun cuando la Constitución de 1993 no contempla este tipo de control, como lo hacen otros ordenamientos, su fundamento radica en:

- El efecto normativo y vinculante de las normas constitucionales.
- La práctica del control de constitucionalidad, donde el rol del Tribunal Constitucional ha sido de permanente colaboración con la actividad legislativa en un esfuerzo por sentar las bases del Estado constitucional en nuestro país.

2.3.3.2. PETITUM

Definida las posibles infracciones a la Constitución, las demandas de inconstitucionalidad deben versar sobre un petitorio específico: uno

establecido normativamente (expulsión de la norma) y dos por vía jurisprudencial (integración e interpretación de la norma).

De otro lado, no pueden presentarse demandas de control de constitucionalidad en dos supuestos abiertamente contradichos en la jurisprudencia:

- En primer lugar no cabe interponer demandas para realizar control difuso de normas con rango de ley. Según la Constitución, en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, se debe preferir la primera. El control difuso debe realizarse en el seno de un caso judicial (o de naturaleza jurisdiccional) cuando la validez de una norma con rango de ley -cuya validez haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control abstracto de constitucionalidad- sea dudosa para resolver la controversia sometida al juzgador. Quien lo plantee debe acreditar que su aplicación le ha causado o pueda causarle un agravio directo por lo que solicita a un órgano jurisdiccional que declare la inaplicabilidad de la norma con rango de ley, con efectos particulares, en aquel caso en que dicha norma resulte manifiestamente incompatible con la Constitución. En caso de plantearse una demanda de inconstitucionalidad pretendiendo un control difuso, ésta debe ser rechazada, toda vez que en este tipo de proceso solo se realiza un control abstracto o concentrado.

- Tampoco corresponde plantear una demanda para efectuar control preventivo de normas con rango de ley. En nuestro ordenamiento, el control constitucional es uno de carácter posterior, 'sucesivo' o

‘represivo’, -en oposición al ‘previo’-, es decir, se produce cuando la norma ha sido emitida. No se encuentra previsto un control jurisdiccional-preventivo de constitucionalidad de las normas con rango de ley, aunque existe la obligación por parte del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo de ejercer este tipo control en un nivel político-preventivo, para cuyos efectos tienen la obligación de observar los criterios vinculantes sentados por la jurisprudencia constitucional, máxime en aquellos asuntos relacionados con el diseño de la política criminal y legislativa del Estado orientada a enfrentar aquellos hechos delictivos que, como los actos de corrupción, afectan la estabilidad, la seguridad, la justicia y la paz ciudadanas en las que se sustenta todo Estado social y democrático de derecho. Por ende, no le corresponde al Tribunal Constitucional pronunciamiento respecto de dispositivos legales inexistentes o posiblemente futuros.

SUB CAPITULO III: SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.1. CONCEPTO

Para GARCÍA referente a las sentencias constitucionales nos dice que:

Estas aluden a aquellos actos procesales emanados de un órgano adscrito a la jurisdicción especializada, mediante los cuales se pone fin a una litis cuya tipología se deriva de alguno de los procesos previstos en el Código Procesal Constitucional. (p. 383)

Asimismo, señala que para el cumplimiento del cometido expuesto, el tribunal constitucional en el caso municipalidad distrital de Lurín expediente N° 0024- 2003-AI/TC) consideró necesario estipular que la estructura interna de sus decisiones se compone de los elementos siguientes: la razón declarativa-axiológica, la razón suficiente (ratio decidendi), la razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la invocación preceptiva y la decisión o fallo constitucional (decisum). (2008, p. 383)

Se debe mencionar acerca de las sentencias atípicas las cuales se han venido desarrollando en nuestro Tribunal Constitucional, como aquellas sentencias que han surgido del –diálogo jurisprudencial entre otros Estado, en el cual el juez constitucional ya no se limitará simplemente a aplicar la norma sino que tendrá un control constitucional, incluso pudiendo eliminar una palabra que colisione con la Constitución, añadir algo al texto incompleto, ordenar una restricción del contenido normativo, dar una recomendaciones o exhortar al legislador para que dentro de un plazo razonable cumpla con expedir una ley sustitutoria, etc.

Es por ello, que el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 004-2004 CC/TC, estableció una doble clasificación acerca de la tipología de sus sentencias: la primera difiere entre sentencias de especies o de principio y la segunda difiere entre sentencias estimativas o desestimativas.

Al respecto, conceptualicemos a cada uno:

Las sentencias de especie son aquellas que constituyen la aplicación simple de la Constitución y demás normas del bloque de constitucionalidad a un caso particular y concreto. En esta hipótesis la labor del juez constitucional es meramente –declarativa porque se limita a expresar la norma contenida en la Constitución o demás preceptos directamente conectados con ella. (GARCIA, 2008, p. 386)

Las sentencias de principio son aquellas que interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, llenan las lagunas y hasta forjan verdaderos precedentes vinculantes. (GARCÍA, 200, p. 386)

La segunda clasificación es la siguiente:

Las sentencias estimativas son aquellas que declaran fundada una demanda de inconstitucionalidad. Su consecuencia jurídica específica es la eliminación o expulsión de la norma cuestionada del ordenamiento jurídico, mediante una declaración de invalidez constitucional. (...)

Estas pueden ser de simple anulación, interpretativas propiamente dichas o manipulativas-interpretativas.

Las sentencias de simple anulación, son aquellas en las que el órgano de control constitucional resuelve dejar sin efecto una parte o la totalidad del contenido de un texto. (p. 388)

Las sentencias interpretativas propiamente dichas son aquellas en las que el órgano de control jurisdiccional según sean las circunstancias que rodean al proceso constitucional declara la inconstitucionalidad de una

interpretación errónea efectuada por algún operador judicial, lo que acarreó una aplicación indebida. (...) Por consiguiente, prohíbe que en el futuro los operadores jurídicos interpreten y apliquen aquella forma de interpretación declarada contraria a la Constitución.(p.389)

Las sentencias interpretativas-normativas (manipulativas) son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad detecta y determina la existencia de un contenido normativo inconstitucional dentro de una ley cuestionada. En ese contexto, procede a la transformación del significado de la parte –infectal, a efectos de evitar su eliminación del ordenamiento jurídico.(...) Esta modalidad se justifica por la necesidad de evitar los efectos perniciosos que pueden presentarse en determinadas circunstancias, como consecuencia de los vacíos legales que surgen luego de la –expulsiónl de una norma del ordenamiento jurídico. (GARCIA, 2008, p. 390).

1.2. TIPOS DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

Según GARCÍA (2008), estas son las modalidades que presentan las sentencias interpretativas manipulativas:

1.2.1. SENTENCIAS REDUCTORAS

La sentencia ordena una restricción o acortamiento de la –extensiónl del contenido normativo de la ley impugnada. Dicha reducción se produce en el ámbito de su aplicación a los casos particulares y concretos que se presentan en la vía administrativa o judicial; es decir, la sentencia reductora restringe el ámbito de aplicación de la ley

impugnada a algunos de los supuestos o consecuencias jurídicas establecidas en la literalidad del texto.

1.2.2. SENTENCIAS ADITIVAS

Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad determina la existencia de una inconstitucionalidad por omisión legislativa. En ese contexto procede a –añadirle algo al texto incompleto, a efecto de transformarlo en plenamente constitucional.

1.2.3. SENTENCIAS SUSTITUTIVAS

Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la inconstitucionalidad parcial de una ley; y simultáneamente incorpora en cambio, un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico; vale decir, dispone una modificación o alteración de una parte literal de la ley. Ahora bien, debe aclararse que la parte sustituyente no es otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico.

1.2.4. SENTENCIAS ESTIPULATIVAS

Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad establece en la parte considerativa de una sentencia, las variables conceptuales o terminológicas que utilizará para analizar y resolver una controversia constitucional. En ese contexto, se describirá y definirá en qué consisten determinados conceptos.

1.2.5. SENTENCIAS EXHORTATIVAS

Son aquellas en donde el órgano de control de la constitucionalidad declara la incompatibilidad constitucional de una parte o la totalidad de una ley, más sin embargo no dispone su inmediata expulsión del ordenamiento constitucional, sino que incita al Parlamento para que dentro de un plazo razonable se sirva expedir una ley sustitutoria con un contenido más acorde al texto fundamental. (p. 394)

Para Landa (2010) referente a las sentencias exhortativas nos dice:

Que una determinada disposición legal es contraria a la Constitución, en vez de declararse su invalidez constitucional, se confiere al legislador un plazo determinado o determinable para que la reforme, con el objeto de eliminar la parte violatoria del texto fundamental. (p. 616)

Según Reyes (s.a.) señala que:

Las sentencias exhortativas son aquellas decisiones que exhortan, recomiendan, o indican a los poderes públicos una determinada acción o abstención (...). Es decir, las sentencias exhortativas recomiendan al legislador adoptar un nuevo texto legislativo que sea conforme a la Constitución. Esta recomendación, por ende, respeta el ámbito de acción que goza el legislador para adoptar las medidas que entienda sean adecuadas para alcanzar un fin. El TC, al adoptar una sentencia exhortativa, no hace más que delimitar el espacio de lo que es constitucional. En <http://www.abogadosdq.com/2015/11/sentencias-exhortativas-y-margen-de.html>

Finalmente de la segunda clasificación las sentencias desestimativas según GARCIA: —son aquellas que declaran, según sea el caso, inadmisibles, improcedentes o infundadas las acciones de garantía, o resuelven desfavorablemente las acciones de inconstitucionalidad (2008, p. 395).

Cabe resaltar que estas sentencias atípicas tienen su justificación en la necesidad de evitar efectos graves que puedan presentarse en los distintos casos como los vacíos legales que pueden surgir tras la expulsión inmediata de una norma declarada inconstitucional, pues el vacío normativo puede generar consecuentemente afectación de derechos fundamentales, es por ello que el Tribunal Constitucional tiene el deber de generar métodos interpretativos o integrativos a razón de que se pueda cubrir estos vacíos legales. Tal afirmación lo confirma el expediente N° 010-2002-AI, enfatizando que el fundamento y la legitimidad de uso de las sentencias atípicas radica en el principio de conservación de la ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la constitución.

Para BICKEL citado por LANDA nos dice que:

El principio de conservación de la ley exige al juez constitucional optar, hasta donde sea razonablemente posible, por la constitucionalidad de una ley impugnada, en aras de afirmar un determinado valor o principio constitucional o un específico derecho fundamental. Es decir, la expulsión de una ley del ordenamiento jurídico por inconstitucional, debe

ser la última ratio a la que debe apelarse. De esta forma, la simple declaración de inconstitucionalidad no debe ser utilizada, salvo si es imprescindible e inevitable. (2010, p. 612)

Y el principio de interpretación desde la Constitución es un axioma o pauta básica que asigna un sentido a una ley cuestionada de inconstitucionalidad, a efectos que ella guarde coherencia y armonía con la Constitución. Dicha interpretación hace que la ley sea conforme a la Constitución; permitiendo, para tal efecto, que se reduzca, sustituya o modifique su aplicación para los casos concretos. (2010, p. 612)

2. SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

2.1. CONCEPTO

Para definir este proceso constitucional, primero se formula el concepto de 'supremacía normativa de la Constitución', que se encuentra recogida en dos vertientes. Conforme a la objetiva, la Constitución preside el ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre toda norma legal y esta sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente, conforme al sistema de fuentes diseñado por la Norma Suprema. De acuerdo con la subjetiva, ningún acto de los poderes públicos o de la colectividad en general puede vulnerar válidamente la Constitución.

En consecuencia, El proceso de inconstitucionalidad constituye un relevante mecanismo de vigilancia del poder en los sistemas

democráticos, porque permite el fortalecimiento de la estructura estatal, al tiempo que posibilita la correcta protección de los derechos fundamentales.

En palabra de Figueroa (2013, pp. 200-201) El proceso de inconstitucionalidad en realidad trasciende esas aparentes contradicciones en la medida que denota una forma y modalidad de proceso de control normativo. Ello en tanto considera la propuesta kelseniana de una modalidad de control concentrado, es decir, una verificación de constitucionalidad de una norma con rango de ley a través de un control constitucional a un nivel en puridad calificado. En otras palabras, se trata de determinar la compatibilidad de la norma sometida a examen con los principios, valores y directrices que representa la Constitución.

Como todo proceso constitucional, el de inconstitucionalidad, aparte de hacer valer el principio de supremacía constitucional, presupone un alto control de la actuación de las partes por el órgano jurisdiccional, a través de principios orientadores como:

- ***El pro actione o favor processum***, por el cual, en un proceso en el que se presenta una duda razonable respecto de si debe o no declararse concluido, el juez debe optar por su continuación. Este principio rige de forma particular en los procesos de inconstitucionalidad porque estos ostentan, más que cualquier otro, una dimensión objetiva de protección de un interés público, que debe tutelarse.

- **La elasticidad (informalismo o aformalismo)**, que manda a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional cumplir las formalidades solo si con ello se logra una mejor protección de los derechos fundamentales. Si el cumplimiento de esas formalidades comporta la desprotección de los derechos y, por ende, su vulneración irreparable, entonces estas deben adecuarse o, de ser el caso, prescindirse, con el objeto de que los fines de los procesos constitucionales se realicen debidamente. Sin embargo, a partir de este principio no puede permitirse que en el proceso de inconstitucionalidad se distorsionen figuras procesales que en él se admitan, tal como se explicará con relación al partícipe. –

- **La gratuidad**, expresada en que el proceso ante el Tribunal Constitucional no tiene costo alguno para el justiciable

2.2. MODALIDADES DE SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD

Las sentencias emitidas en procesos de inconstitucionalidad se clasifican en estimativas y desestimativas. Veamos, a continuación, sus contenidos a modo de referencia.

2.3.1. SENTENCIAS ESTIMATIVAS

Las sentencias estimativas pueden ser clasificadas, a su vez, del siguiente modo:

– **De simple anulación**: dejan sin efecto una parte o la totalidad del contenido de un texto legal. Expresan, por sí mismas, el rol de legislador negativo del Tribunal en cuanto, en puridad, la norma es expulsada del ordenamiento jurídico.

– ***Interpretativas propiamente dichas***: se caracterizan porque declaran la inconstitucionalidad de una determinada interpretación de un dispositivo legal efectuado por algún intérprete jurídico.

Estas sentencias interpretativas, en términos de Eguiguren (2009, p. 264), «buscan encontrar formas de adecuación de las normas a la Constitución y otorgarles un sentido normativo y de aplicación que las haga compatibles con esta, a fin de evitar la declaración de inconstitucionalidad, que implicaría su derogación

– ***Interpretativas manipulativas***: en esta modalidad el Tribunal Constitucional identifica que existe un contenido contrario a la Constitución dentro de un dispositivo de rango legal. Se produce un procedimiento de manipulación a mérito del cual un contenido se considera eliminado y se procede a una operación que bien puede denominarse reconstructiva o de reposición. Tras esta actividad, se agrega a dicho texto un contenido y sentido interpretativo que no se había recogido antes en modo expreso en la Carta Constitucional o norma legal, resultando compatible con ella.

Las **sentencias interpretativas-manipulativas** presentan distintas modalidades:

– ***Sentencias reductoras***: asumen que una parte del dispositivo legal es contraria a la Constitución por su redacción excesiva y desmesurada. En ese sentido, se ordena restringir el ámbito de aplicación de dicho texto, inaplicando algunos supuestos o consecuencias jurídicas que

genéricamente parecerían estar comprendidos en el dispositivo legal cuestionado, pues su inclusión resultaría inconstitucional». En este caso, el intérprete reduce y sustrae el sentido interpretativo contrario a la Constitución.

– **Sentencias aditivas:** en este caso se determina la existencia de inconstitucionalidad porque el legislador reguló una materia de manera incompleta, es decir, con un contenido menor al que le exige la Constitución. Ante ello, no se declara la inconstitucionalidad de la disposición cuestionada, (como enunciado lingüístico del texto normativo) o la norma producto de su interpretación, sino aquel extremo de los textos en el cual no consignó o excluyó determinado contenido que según la Constitución debió ser comprendido. Tiene lugar la adición de un contenido interpretativo.

– **Sentencias sustitutivas:** Sáenz Dávalos advierte respecto a esta modalidad que Mediante ellas se declara que la disposición legislativa no es inconstitucional en su totalidad, sino en una de las formulaciones lingüísticas que contiene. Es decir, se considera que la disposición es inconstitucional en cuanto prevé una cosa determinada, debiendo haberse previsto otra cosa para que sea constitucionalmente conforme.

– **Sentencias exhortativas:** acotan Sáenz Dávalos y otros autores que Mediante ellas los tribunales constitucionales evitan declarar la inconstitucionalidad de la ley, y exhortan al Poder Legislativo para que este realice las modificaciones necesarias a efectos de salvar ciertas

inconstitucionalidades. Sin embargo, su uso no ha estado exclusivamente vinculado con las sentencias formalmente desestimatorias. En ocasiones, también lo han estado con sentencias estimatorias, en cuyo caso, al declararse la inconstitucionalidad de la disposición cuestionada, los tribunales constitucionales han dirigido determinadas recomendaciones al legislador, a fin de que estas sean tomadas en cuenta en una posterior reglamentación de la materia.

– **Sentencias estipulativas:** con relación a ellas, es importante reseñar que «en su parte considerativa desarrollan las variables conceptuales o terminológicas que utilizarán posteriormente para analizar y resolver una controversia constitucional»

2.3.2. SENTENCIAS DESESTIMATIVAS

Las sentencias desestimatorias declaran improcedente o infundada una demanda de inconstitucionalidad y, en propiedad, dejan incólume la norma con rango de ley impugnada. Este tipo de sentencias obedece, de un lado, a que no se ha quebrantado la presunción de constitucionalidad de la norma y, en rigor, el Tribunal Constitucional ha salvado la compatibilidad de la norma cuestionada con la Ley Fundamental. De otro lado, expresan una ratio de constitucionalidad de las normas en cuanto no se ha demostrado, por la forma o el fondo, la insuficiencia de la norma sometida a examen en relación con el principio de primacía normativa de la Constitución. A este respecto, las normas no tienden a ser deficientes pues la vocación del legislador se orienta por la construcción de normas que aspiran a ser compatibles con la Norma

Normarum, encontrándose excluido un escenario de deficiencia de las normas. Sin embargo, sí podemos encontrarnos frente a un escenario de insuficiencia, el cual, de configurarse, sí justifica una decisión estimatoria del Guardián de la Constitución. Dicha calidad insuficiente genera un efecto integrador de los principios constitucionales.

2.3. EFECTOS

Expulsión de la norma

La pretensión natural de la demanda de inconstitucionalidad en el sistema constitucional peruano se refiere a la expulsión de normas con rango de ley del ordenamiento. Busca, como dice la Constitución, que dicha norma quede sin efecto, empero no su derogación, pues el único facultado para derogar las leyes existentes en el ordenamiento jurídico es el Congreso de la República

Integración del ordenamiento o de la norma

Tiene lugar en los supuestos de inconstitucionalidad por omisión relativa o de la ley. La necesidad de su control en el proceso de inconstitucionalidad obedece, entre otras razones, a:

- La necesidad de reivindicar el valor normativo de la Constitución.
- La reivindicación de la naturaleza 'social' del Estado constitucional, en el entendido, de que los derechos tradicionalmente postergados o dejados al ocio del legislador son los derechos sociales.
- La necesidad de relacionar el poder constituyente con el poder constituido,

permitiendo un desarrollo responsable de los contenidos de la Constitución.

La naturaleza y rol actual que han asumido los Tribunales Constitucionales en su labor de defensa de lo que la Constitución ordena. - La necesidad de tomar en serio las ‘obligaciones constitucionales’, en este caso, las que corresponden en esencia al legislador de cara a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales.

Interpretación de la norma

Es pacífico aceptar que dada la calidad de supremo intérprete de la Constitución del Tribunal Constitucional, sus interpretaciones resultarían vinculantes para todos los poderes públicos, lo cual contribuiría a dotar de predictibilidad a la aplicación del sistema jurídico. La pregunta que subyace a dicho enunciado general es si puede tomarse como objeto de la pretensión en un proceso de inconstitucionalidad la búsqueda de una interpretación de normas con rango de Ley.

3. VACATIO SENTENTIAE

3.1. CONCEPTO

la Sentencia N° 00010-2002-AI/TC, N° 00023-2003-AI/TC, N° 0004-2006-PI/TC en las cuales se emplearon por primera vez el término —Vacatio Sententiae, mediante el cual se dispone la suspensión de la eficacia de una parte del fallo. Es decir, se modulan los efectos de la decisión en el tiempo. Dicha expresión es un equivalente jurisprudencial

de la vacatio legis o suspensión temporal de la entrada en vigencia de una ley aprobada. (LANDA, 2010, p. 18)

Asimismo, Carpio (2005) señala: –La expresión –dejar sin efecto refleja –la imposibilidad de aplicación presente y futura de la norma declarada inconstitucional, pero también su expulsión del ordenamiento jurídico (Pág. 62)

CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

En cuanto a esta parte de la investigación debemos indicar que se aplicó una encuesta dirigida para Jueces, Fiscales y Abogados del distrito judicial de Lambayeque para obtener su posición frente a la necesidad de regulación de la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a los dispuesto por el Tribunal Constitucional.

3.1.1. Encuesta a operadores jurídicos

Se analizarán los siguientes cuadros estadísticos:

CUADRO N° 01: PRINCIPAL FUNCIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
GRÁFICO 01

CUADRO N° 02: PRINCIPIOS DE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
GRÁFICO 02

CUADRO N° 03: CONCEPTO DEL PROCESO CONSTITUCIONAL
GRÁFICO 03

CUADRO N° 04: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
GRÁFICO 04

CUADRO N° 05: FINALIDAD DEL PROCESO DE
INCONSTITUCIONALIDAD
GRÁFICO 05

CUADRO N° 06: INCONSTITUCIONAL UNA NORMA JURÍDICA CON
RANGO DE LEY
GRÁFICO 06

CUADRO N° 07: SENTENCIA CONSTITUCIONAL

GRÁFICO 07

CUADRO N° 08: SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

GRÁFICO 08

CUADRO N° 09: PRINCIPIO QUE FUNDAMENTA LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD.

GRÁFICO 09

CUADRO N° 10: CONCEPTO VACATIO SENTENTIAE

GRÁFICO 10

CUADRO N° 11: FUNDAMENTOS JURÍDICO-SOCIALES PARA LA VACATIO SENTENTIAE

GRÁFICO 11

CUADRO N° 12: EFECTOS DE LA NO APLICACIÓN DE LA VACATIO SENTENTIAE

GRÁFICO 12

CUADRO N° 13: LA VACATIO SENTENTIAE Y LA CERTEZA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

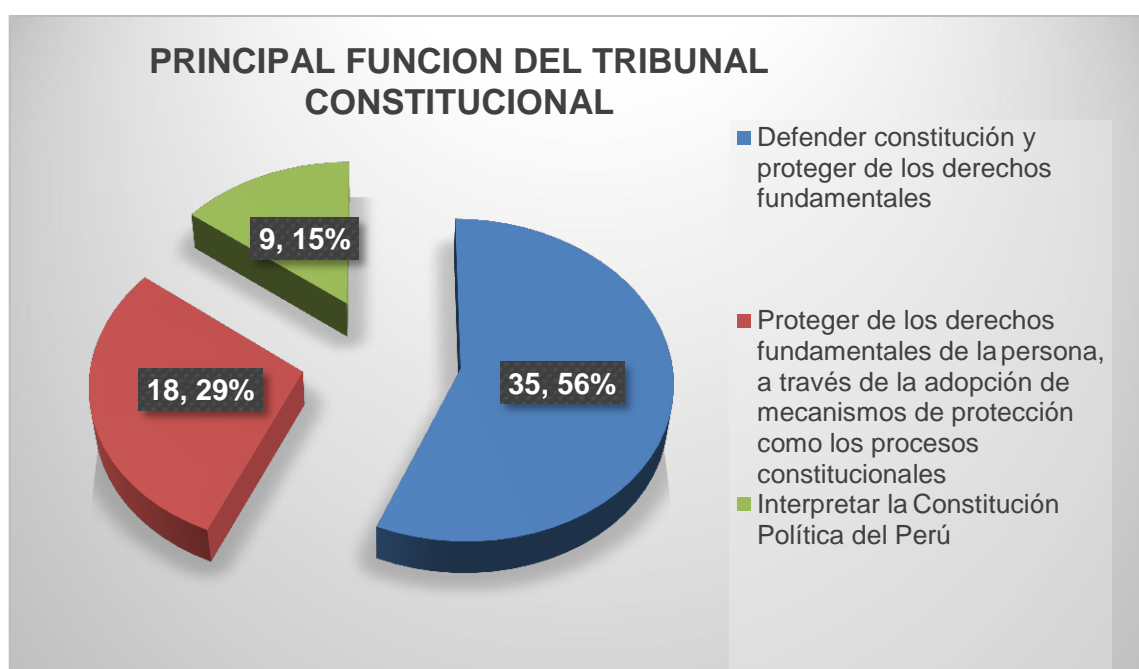
GRÁFICO 13

CUADRO N° 14: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA VACATIO SENTENTIAE

GRÁFICO 14

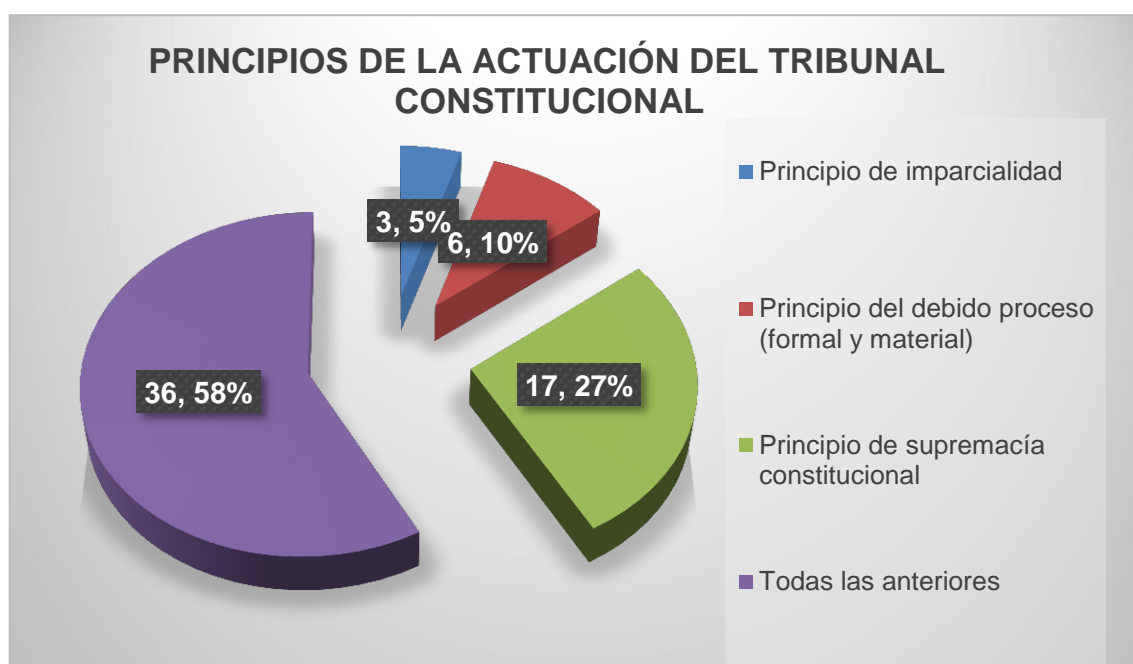
CUADRO N° 01: PRINCIPAL FUNCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su conocimiento en asuntos Jurídicos: ¿Cuál es la principal función del Tribunal Constitucional?	Defender constitución y proteger de los derechos fundamentales	35	56%
	Proteger de los derechos fundamentales de la persona, a través de la adopción de mecanismos de protección como los procesos constitucionales	18	29%
	Interpretar la Constitución Política del Perú	9	15%
	TOTAL	62	100%

GRÁFICO 01

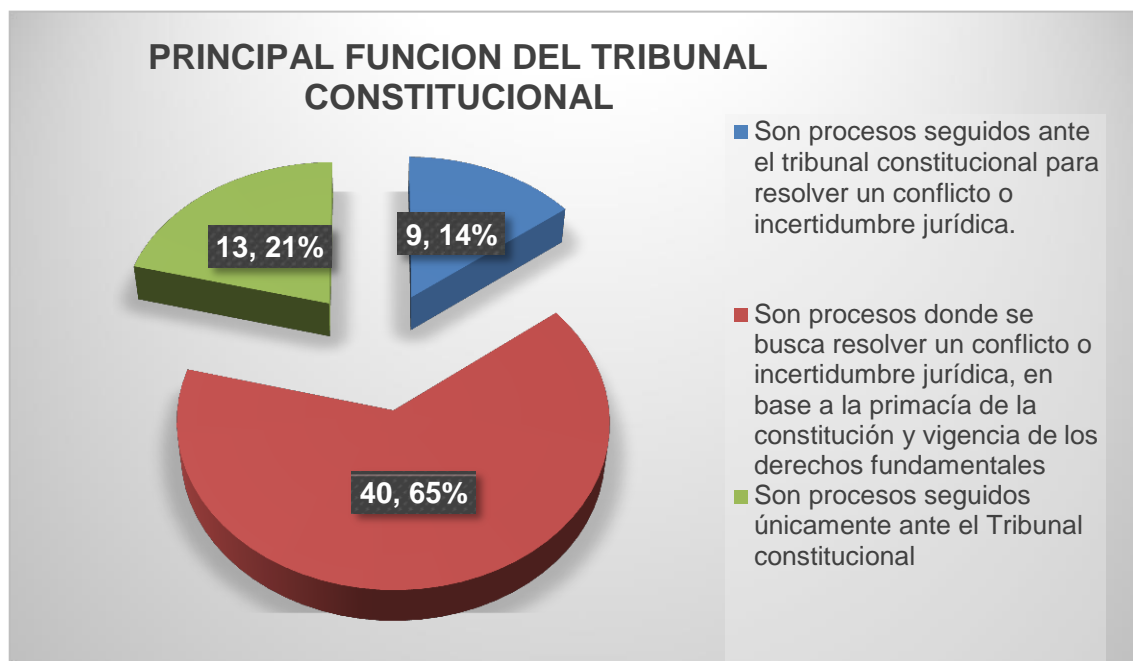
CUADRO N° 02 : PRINCIPIOS DE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Cuál de los siguientes, constituye un principio fundamental de la actuación del Tribunal Constitucional?:	Principio de imparcialidad	3	5 %
	Principio del debido proceso (formal y material)	6	10 %
	Principio supremacía de la constitución	17	27 %
	Todas las anteriores	36	58%
TOTAL		62	100 %

GRÁFICO 02

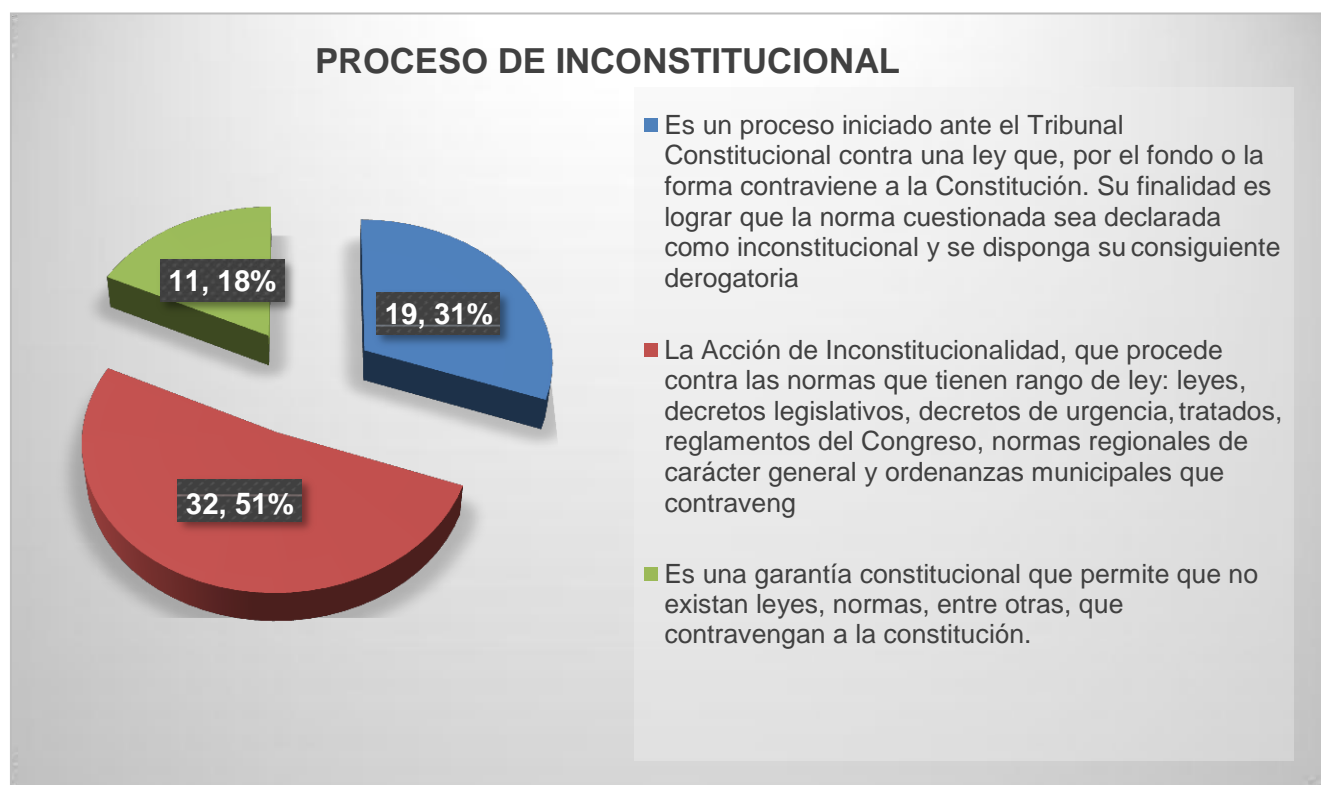
CUADRO N° 03 : CONCEPTO DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿En qué consiste el proceso de inconstitucionalidad?	Son procesos seguidos ante el tribunal constitucional para resolver un conflicto o incertidumbre jurídica.	9	14%
	Son procesos donde se busca resolver un conflicto o incertidumbre jurídica, en base a la primacía de la constitución y vigencia de los derechos fundamentales	40	65%
	Son procesos seguidos únicamente ante el Tribunal constitucional	13	21%
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 03

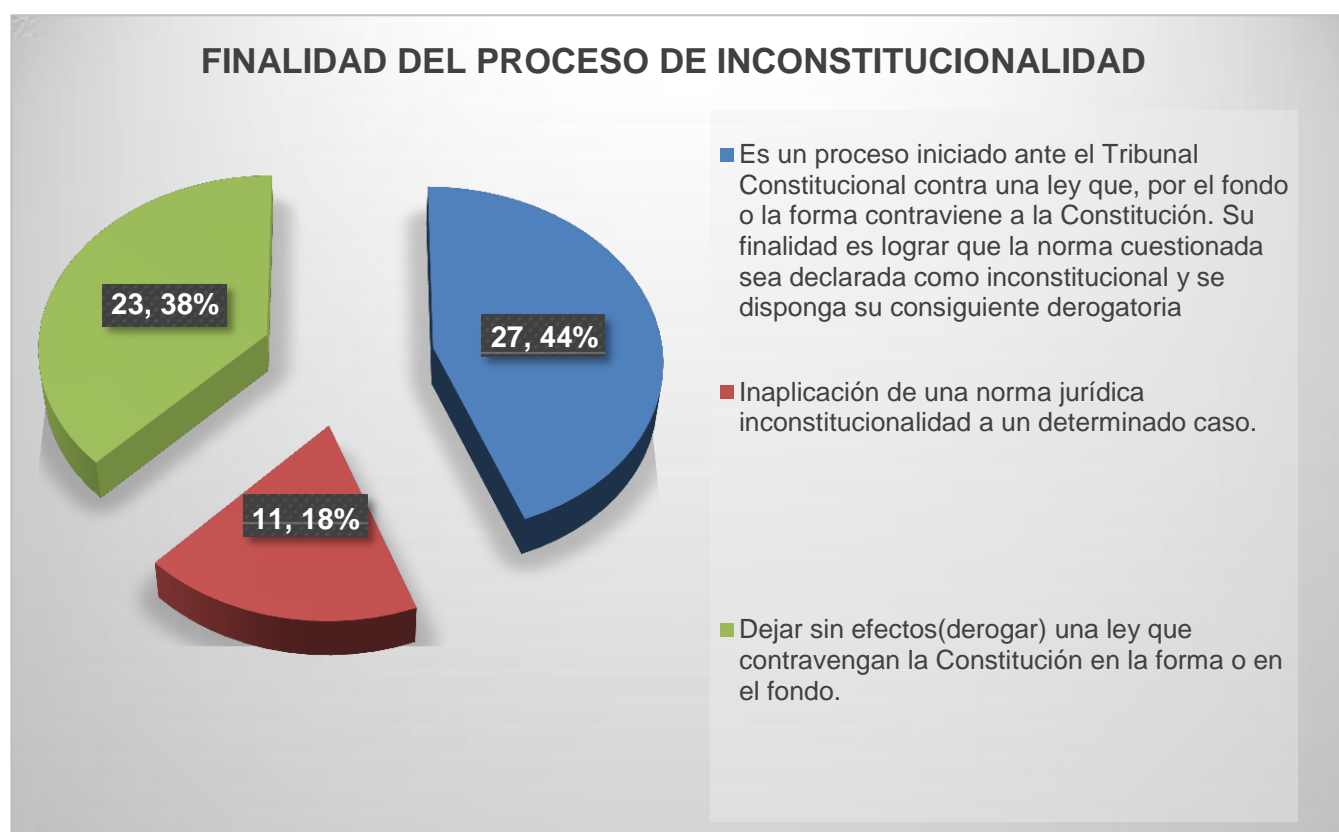
CUADRO N° 04: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
	Es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria.	19	31 %
¿En qué Consiste el proceso de inconstitucionalidad?	La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.	32	51 %
	Es una garantía constitucional que permite que no existan leyes, normas, entre otras, que contravengan a la constitución.	11	18%
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 04

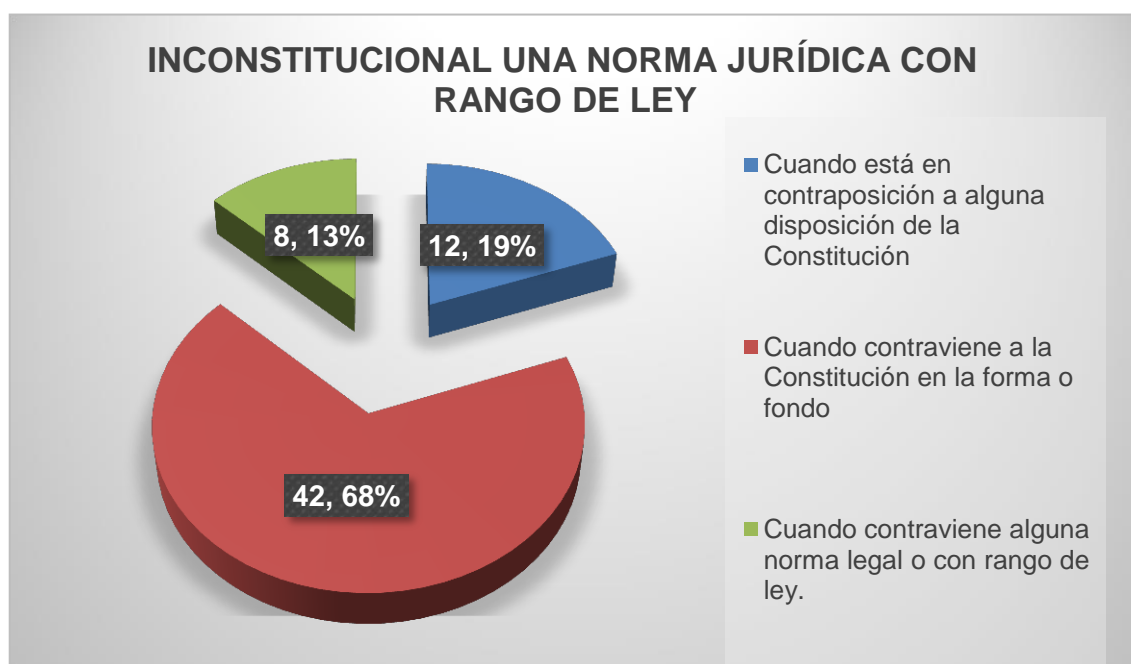
CUADRO N° 05: FINALIDAD DEL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según sus conocimientos ¿Cuál es la finalidad de un proceso de inconstitucionalidad?	Es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria.	27	44 %
	Inaplicación de una norma jurídica inconstitucionalidad a un determinado caso.	11	18 %
	Dejar sin efectos(derogar) una ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.	23	38 %
	TOTAL	62	100%

GRÁFICO 05

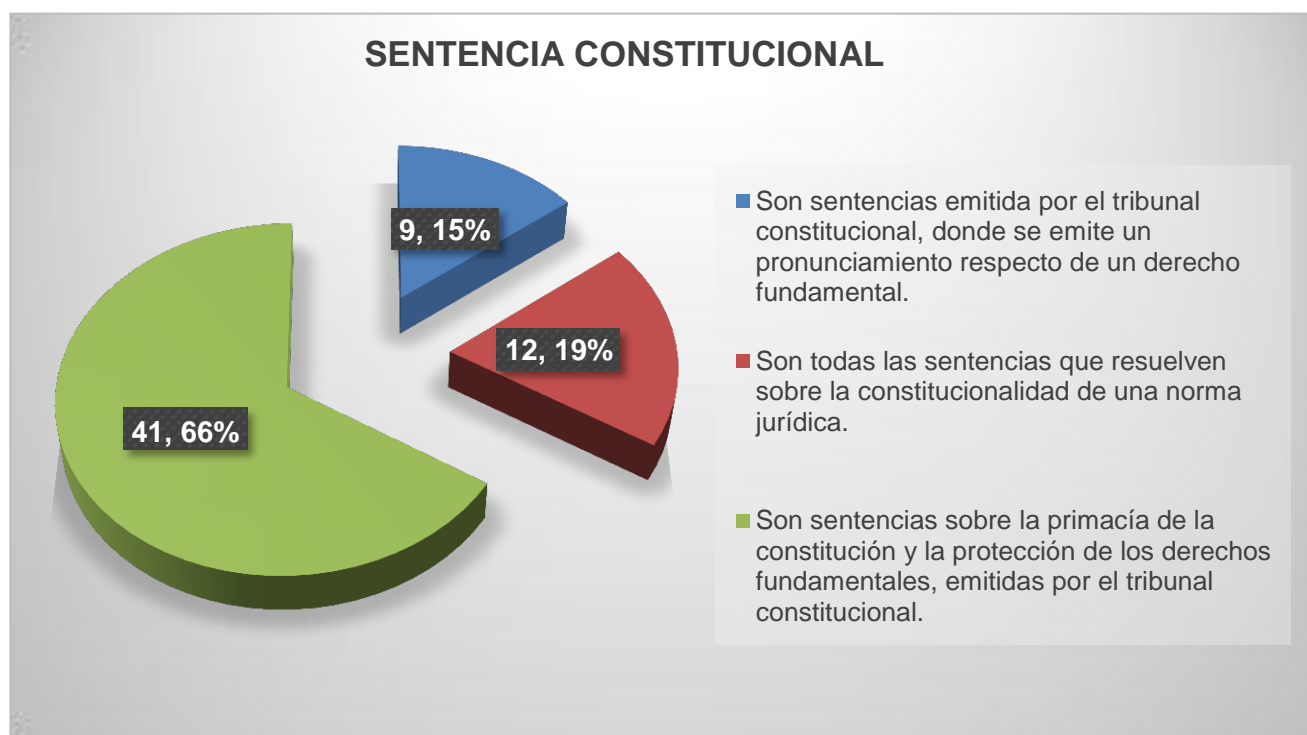
CUADRO N° 06: INCONSTITUCIONAL UNA NORMA JURÍDICA CON RANGO DE LEY

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Cuándo es inconstitucional una norma jurídica con rango de ley?	Cuando está en contraposición a alguna disposición de la Constitución.	12	13%
	Cuando contraviene a la Constitución en la forma o fondo.	42	68 %
	Cuando contraviene alguna norma legal o con rango de ley.	8	19 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 06

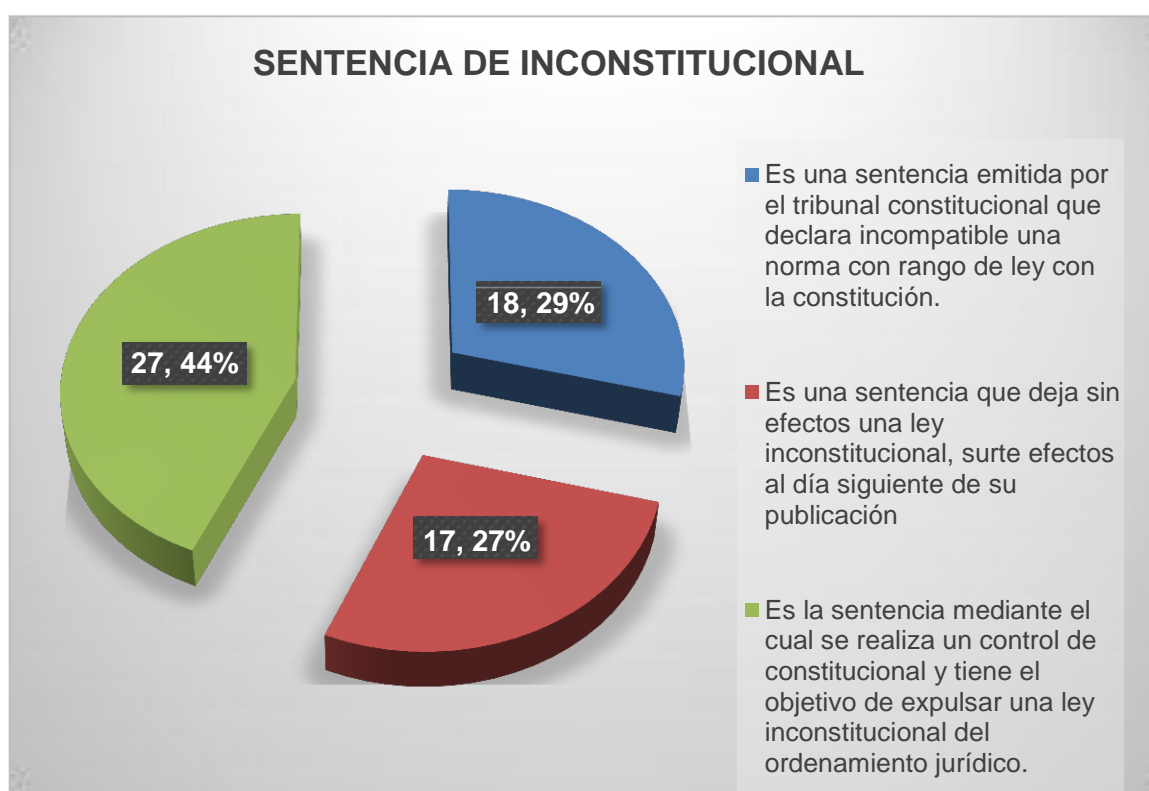
CUADRO N° 07 : SENTENCIA COSTITUCIONAL

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Según su experiencia ¿Qué son las sentencias constitucionales?	Son sentencias emitidas por el tribunal constitucional, donde se emite un pronunciamiento respecto de un derecho fundamental.	9	15 %
	Son todas las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de una norma jurídica.	12	19 %
	Son sentencias sobre la primacía de la constitución y la protección de los derechos fundamentales, emitidas por el tribunal constitucional.	41	66 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 07

CUADRO N° 08 : SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

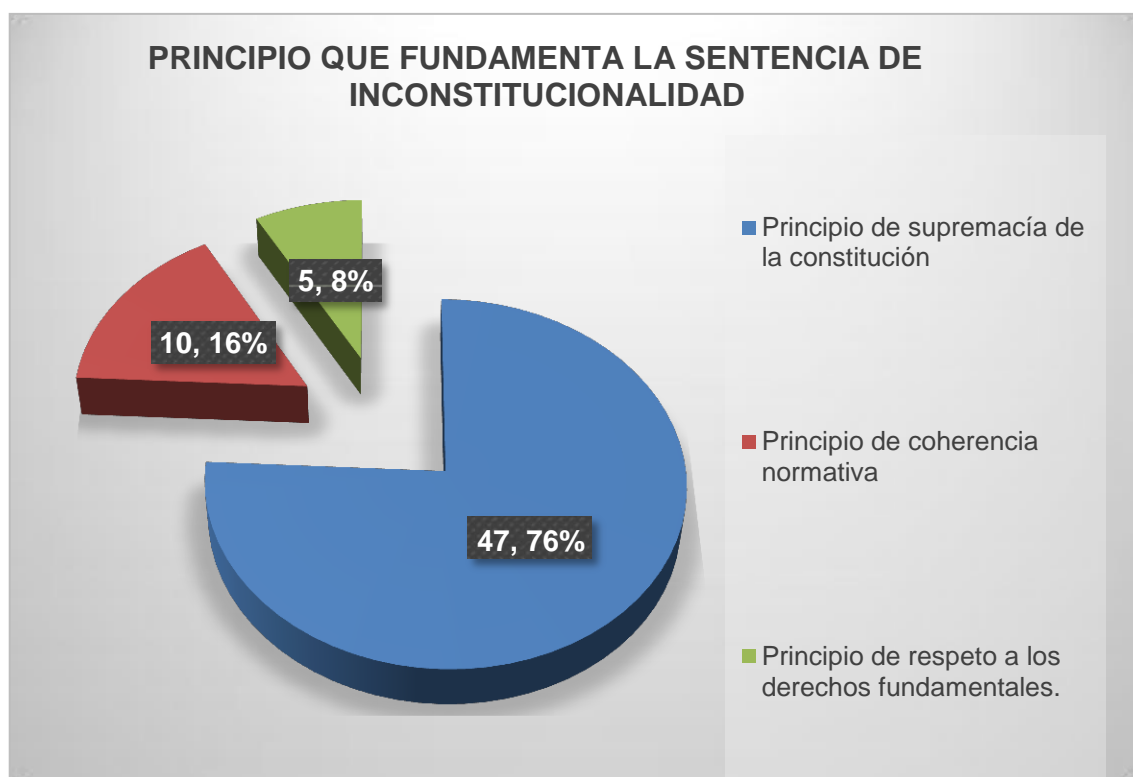
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Qué entiende por sentencia de inconstitucionalidad?	Es una sentencia emitida por el tribunal constitucional que declara incompatible una norma con rango de ley con la constitución.	18	29 %
	Es una sentencia que deja sin efectos una ley inconstitucional, surte efectos al día siguiente de su publicación	17	27 %
	Es la sentencia mediante el cual se realiza un control de constitucional y tiene el objetivo de expulsar una ley inconstitucional del ordenamiento jurídico.	27	44 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 08

**CUADRO N° 09 : PRINCIPIO QUE FUNDAMENTA LA SENTENCIA DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

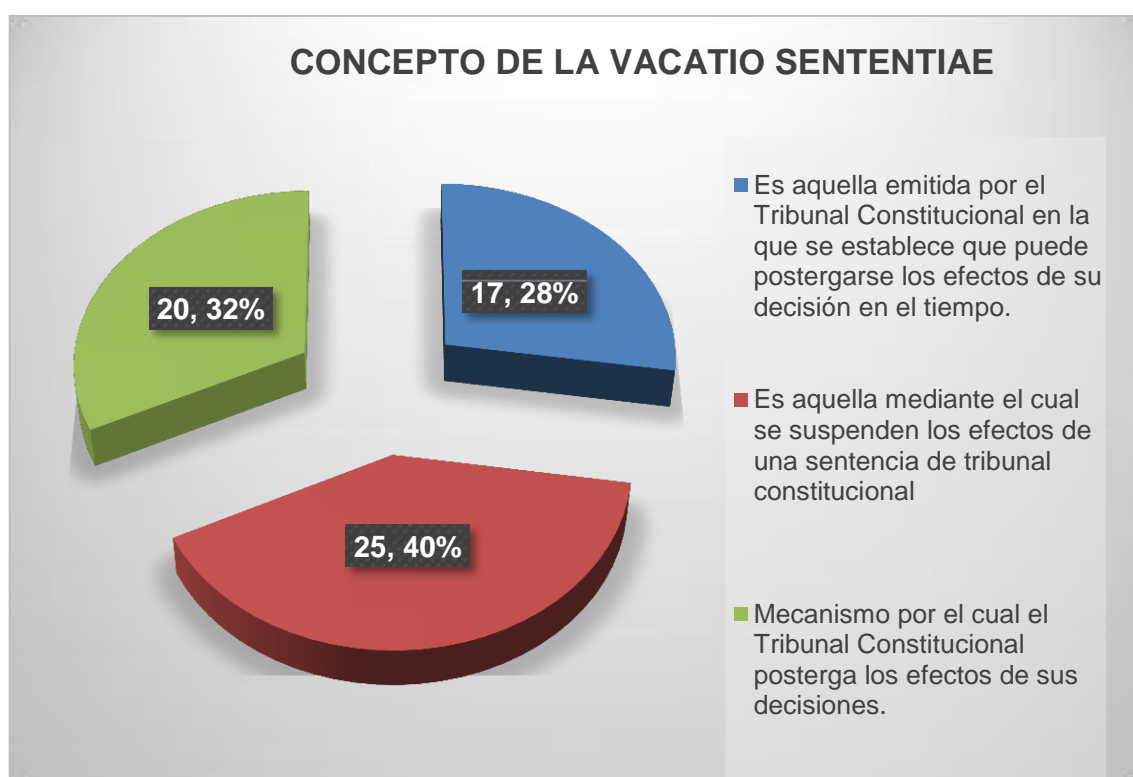
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Cuál es el principio que fundamenta, en mayor grado, una sentencia de inconstitucionalidad	Principio de supremacía de la constitución	47	76%
	Principio de coherencia normativa	10	16 %
	Principio de respeto a los derechos fundamentales.	5	8 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 09



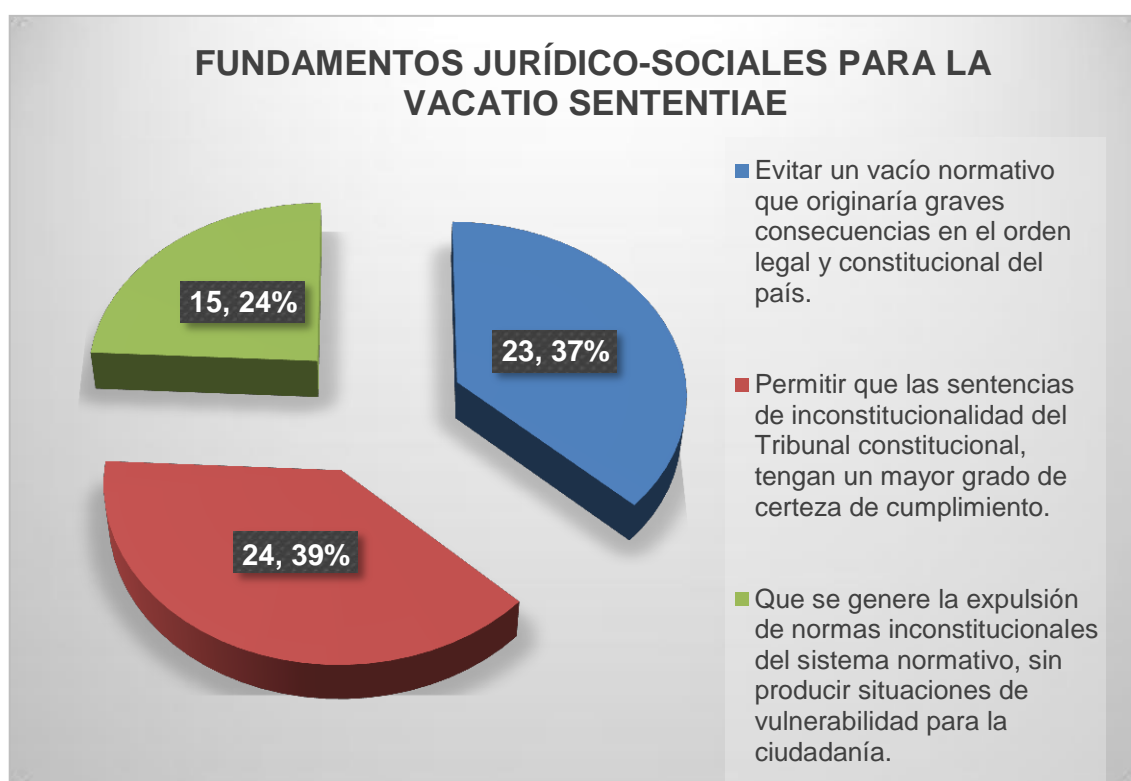
CUADRO N° 10: CONCEPTO DE VACATIO SENTENTIAE

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Qué entiende por vacatio sententiae?	Es aquella emitida por el Tribunal Constitucional en la que se establece que puede postergarse los efectos de su decisión en el tiempo.	17	28 %
	Es aquella mediante el cual se suspenden los efectos de una sentencia de tribunal constitucional	25	40 %
	Mecanismo por el cual el Tribunal Constitucional posterga los efectos de sus decisiones.	20	32 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 10

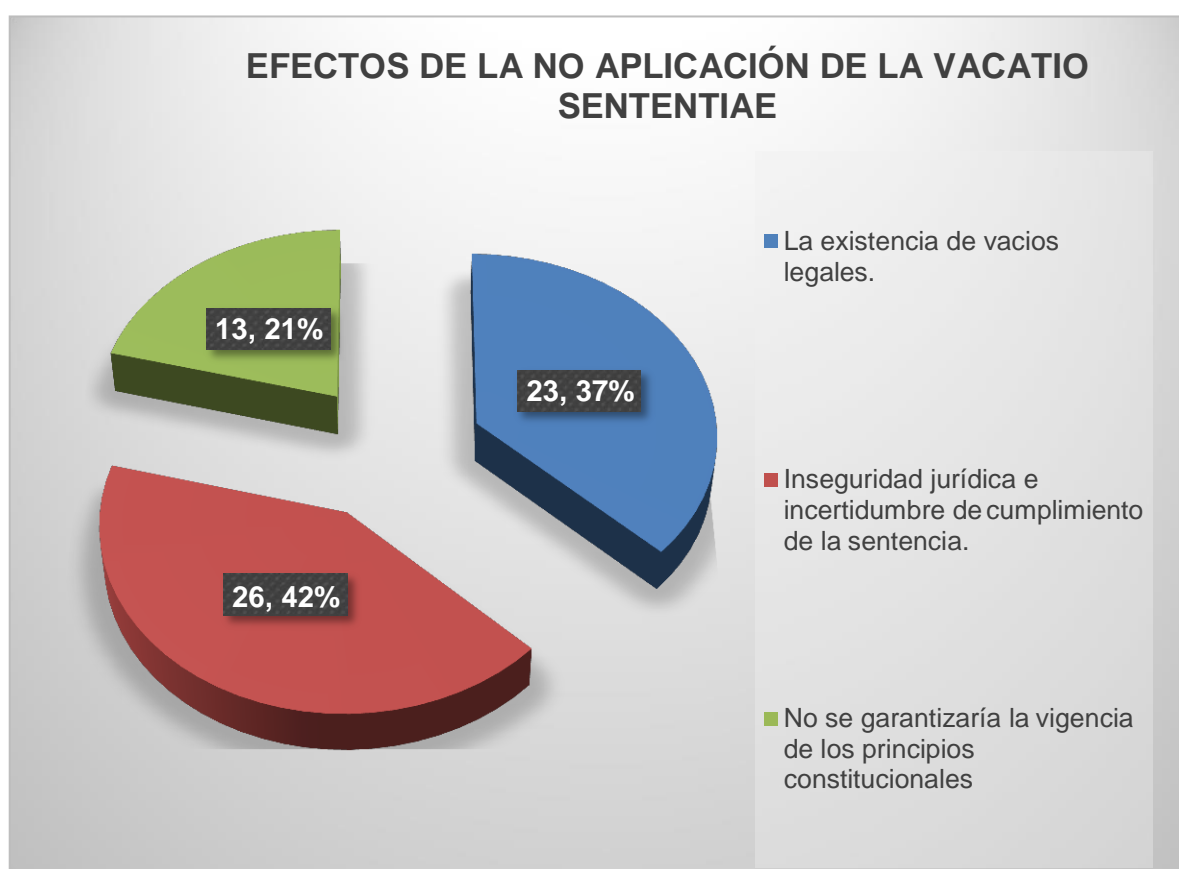
CUADRO N° 11: FUNDAMENTOS JURÍDICO-SOCIALES PARA LA VACATIO SENTENTIAE

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Los fundamentos jurídico-sociales para suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad son:	Evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del país.	23	37 %
	Permitir que las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal constitucional, tengan un mayor grado de certeza de cumplimiento.	24	39 %
	Que se genere la expulsión de normas inconstitucionales del sistema normativo, sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía.	15	24 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 11

CUADRO N° 12: EFECTOS DE LA NO APLICACIÓN DE LA VACATIO SENTENTIAE

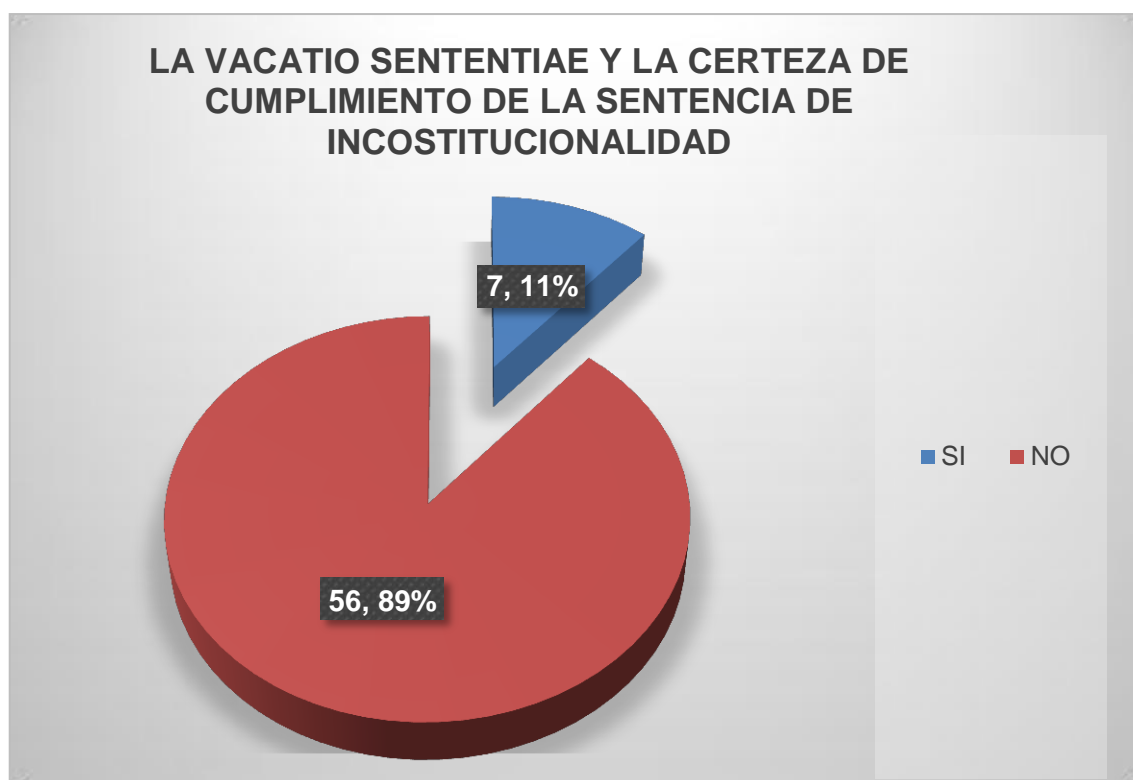
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A su parecer ¿Cuáles serían los efectos de no suspender los efectos de una sentencia emitida en un proceso que declara la inconstitucionalidad de una norma?	La existencia de vacios legales.	23	37 %
	Inseguridad jurídica e incertidumbre de cumplimiento de la sentencia.	26	42 %
	No se garantizaría la vigencia de los principios constitucionales	14	21 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 12

CUADRO N° 13: LA VACATIO SENTENTIAE Y LA CERTEZA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

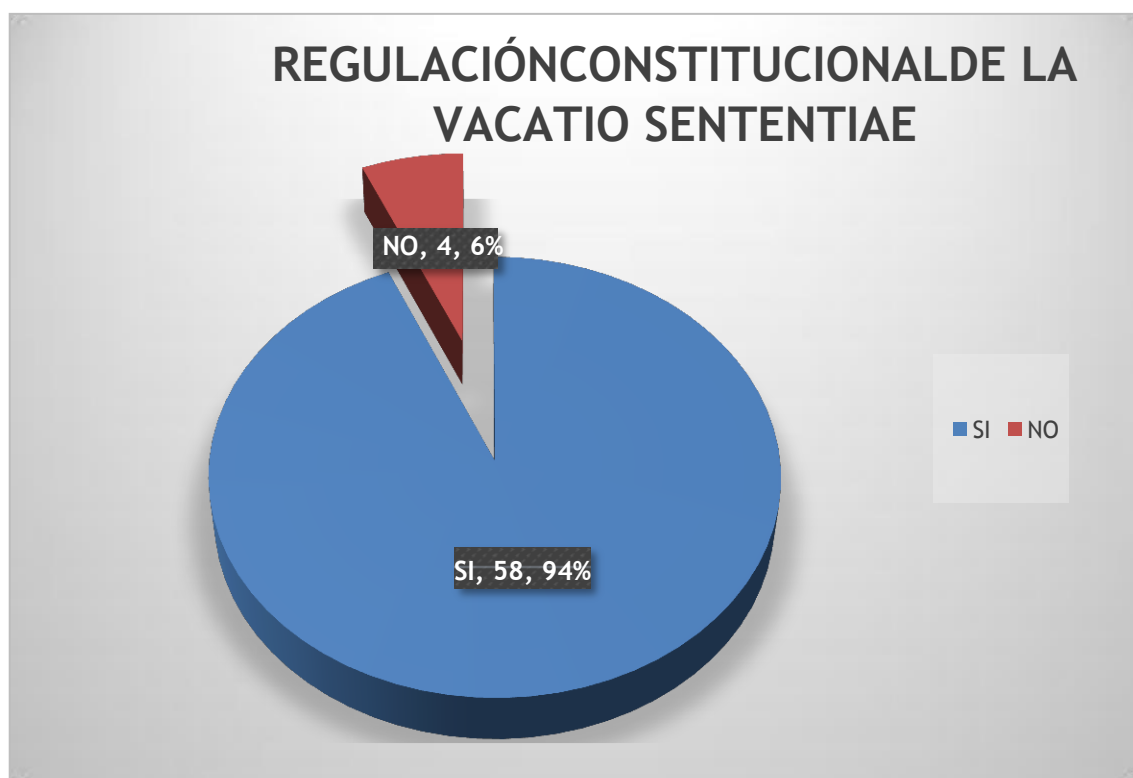
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad se otorgará una mayor certeza de cumplimiento?	SI	7	11 %
	NO	56	89 %
TOTAL		62	100%

GRÁFICO 13



CUADRO N° 14: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA VACATIO SENTENTIAE

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿Considera Ud. que es correcto regular en el plano constitucional la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a lo dispone el Tribunal constitucional?	SI	58	94%
	NO	4	6 %
TOTAL			100%

GRÁFICO 14

3.1.2. Análisis de los Resultados

Del **“CUADRO N° 01: PRINCIPAL FUNCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL”** que contiene la interrogante: ¿Cuál es la principal función del Tribunal Constitucional? y sobre la base de 62 personas encuestadas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se desprende que para el 56 % de los encuestados indicó que la principal función del tribunal constitucional es Defender constitución y proteger de los derechos fundamentales, mientras que un 28 % de los encuestados fue de opinión que la principal función del tribunal constitucional es proteger de los derechos fundamentales de la persona, a través de la adopción de mecanismos de protección como los procesos constitucionales y el restante 15 % de los encuestados señaló que la principal función del tribunal constitucional es interpretar la Constitución Política del Perú. Lo cual se corrobora con el GRÁFICO 01.

En ese mismo criterio de ideas, se tiene que ante la interrogante: ¿Cuál de los siguientes, constituye un principio fundamental de la actuación del Tribunal Constitucional? , contenida en el **“CUADRO N° 02: PRINCIPIOS DE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ”** y sobre una población maestra de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se tiene que para el 5 % del total de los encuestados señaló que el principio de imparcialidad es el principio fundamental de la actuación del tribunal constitucional, mientras que para un 10% de los encuestados

opinión que el principio del debido proceso (formal y material) es el principio fundamental de la actuación del tribunal constitucional, y para el 27% de los encuestados indicó que el principio de supremacía de la Constitución es el principio fundamental de la actuación del tribunal constitucional, y por último el mayor porcentaje, siendo un 58% señaló que todos los principio anteriores son principales, todo lo expresado se demuestra con el GRÁFICO 02.

En el **“CUADRO N° 03: CONCEPTO DEL PROCESO CONSTITUCIONAL”**, que contiene la pregunta: ¿En qué consiste el proceso de inconstitucionalidad? , y teniendo en cuenta la población muestral de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, muestra que para el 14 % de los encuestados considera que para que son procesos seguidos ante el tribunal constitucional para resolver un conflicto o incertidumbre jurídica., mientras que para un 65% de los encuestados son procesos donde se busca resolver un conflicto o incertidumbre jurídica, en base a la primacía de la constitución y vigencia de los derechos fundamentales, y para el restante 21% son procesos seguidos únicamente ante el Tribunal constitucional, lo cual queda corroborado con el GRÁFICO 03.

En ese margen de ideas, cuando se le formula la interrogante: ¿En qué consiste el proceso de inconstitucionalidad? , a la población encuestada de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, el **“CUADRO N° 04: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD”**, muestra que para el 19 % de los

encuestados considera que es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución y su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria., mientras que el 51 % de los encuestados indicó que La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo, y el restante 18 % de los encuestados expreso que es una garantía constitucional que permite que no existan leyes, normas, entre otras, que contravengan a la constitución. Todo ello queda demostrado con el GRÁFICO 04.

Del **“CUADRO N° 05: FINALIDAD DEL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD”**, que contiene la siguiente interrogante: ¿Cuál es la finalidad de un proceso de inconstitucionalidad?, y dentro de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 44 % del total de encuestados precisó que es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria., por su parte, un 18 % de los encuestados expresó que su finalidad es la inaplicación de una norma jurídica inconstitucionalidad a

un determinado caso y el restante 38 % de los encuestados manifestó que su finalidad es dejar sin efectos(derogar) una ley que contravenga la Constitución en la forma o en el fondo. Lo dicho anteriormente se corrobora en el GRÁFICO 05.

Luego, de una población encuestada de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque expresan su opinión ante la interrogante: ¿Cuándo es inconstitucional una norma jurídica con rango de ley?, contenida en el **“CUADRO N° 06: INCONSTITUCIONAL UNA NORMA JURÍDICA CON RANGO DE LEY”**, para el 13% de los encuestados existe inconstitucionalidad cuando está en contraposición a alguna disposición de la Constitución , mientras que para un 68% de los encuestados existe inconstitucionalidad Cuando contraviene a la Constitución en la forma o fondo. Y el restante 19% indicó que existe inconstitucionalidad Cuando contraviene alguna norma legal o con rango de ley., siendo que todo lo expresado por este cuadro se verifica en el GRÁFICO 06.

De otro lado, el **“CUADRO N° 07: SENTENCIA CONSTITUCIONAL”**, que contiene la pregunta formulada a 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque: ¿Qué son las sentencias constitucionales?, siendo que para el 15% del total de encuestados señaló que son sentencias emitidas por el tribunal constitucional, donde se emite un pronunciamiento respecto de un derecho fundamental, mientras que para un 19% de los encuestados precisó que son todas las sentencias que resuelven sobre la

constitucionalidad de una norma jurídica, y el otro 66% restante de los encuestados expreso que son sentencias sobre la primacía de la constitución y la protección de los derechos fundamentales, emitidas por el tribunal constitucional. . Lo indicado anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 07.

Por su parte, el **“CUADRO N° 08: SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD”**, que contiene la inquietud: ¿Qué entiende por sentencia de inconstitucionalidad? formulada a 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 29 % de los encuestados es una sentencia emitida por el tribunal constitucional que declara incompatible una norma con rango de ley con la constitución, por su parte, un 27% del total de encuestados considera que Es una sentencia que deja sin efectos una ley inconstitucional, surte efectos al día siguiente de su publicación, y el restante 44% de los encuestados señaló que es la sentencia mediante el cual se realiza un control de constitucional y tiene el objetivo de expulsar una ley inconstitucional del ordenamiento jurídico. Todo lo señalado está comprendido en el GRÁFICO 08.

Así también, del **“CUADRO N° 09: PRINCIPIO QUE FUNDAMENTA LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD”**, se desprende que entre 62 personas conformadas por Jueces, Fiscales y Abogados que se le planteó la pregunta: Cuál es el principio que fundamenta, en mayor grado, una sentencia de inconstitucionalidad, para el 76% de los encuestados indicó que el principio de supremacía de la constitución

mientras que el 16% de los encuestados precisó que es el principio de coherencia normativa y el otro 8% de los encuestados señaló que es el principio de respeto a los derechos fundamentales. , corroborándose lo expresado con el GRÁFICO 09.

En el “**CUADRO N° 10: CONCEPTO VACATIO SENTENTIAE**”, que contiene la interrogante: ¿Qué entiende por vacatio sententiae?, y de 62 personas como población encuestada entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se desprende que para el 28% del total de encuestados es aquella emitida por el Tribunal Constitucional en la que se establece que puede postergarse los efectos de su decisión en el tiempo., mientras que para el 40% de ellos manifestó que es aquella mediante el cual se suspenden los efectos de una sentencia de tribunal constitucional, y el otro 32% restante hizo de conocimiento que es un mecanismo por el cual el Tribunal Constitucional posterga los efectos de sus decisiones. Lo expresado por este cuadro se corrobora con el GRÁFICO 10.

Se llevó en consulta la interrogante: Los fundamentos jurídico-sociales para suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad a un población encuestada de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, resultados contenidos en el “**CUADRO N° 11: FUNDAMENTOS JURÍDICO-SOCIALES PARA LA VACATIO SENTENTIAE**”, de donde se desprende que para el 37% de los encuestados el fundamento es evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del

país, mientras que para un 39% de los encuestados señala que el fundamento es permitir que las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, tengan un mayor grado de certeza de cumplimiento, y el restante 19.57% de ellos considera que el fundamento es que se genere la expulsión de normas inconstitucionales del sistema normativo, sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía.. Siendo, en consecuencia, que todo ello se demuestra con el GRÁFICO 11.

Por su parte, el “**CUADRO N° 12: EFECTOS DE LA NO APLICACIÓN DE LA VACATIO SENTENTIAE**”, en donde se formuló a 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque la consulta: ¿Cuáles serían los efectos de no suspender los efectos de una sentencia emitida en un proceso que declara la inconstitucionalidad de una norma?, muestra que para el 37% de los encuestados el efecto sería la existencia de vacíos legales, mientras que para el 42% de ellos indicó que el efecto sería la Inseguridad jurídica e incertidumbre de cumplimiento de la sentencia, y para el restante 21% de los encuestados el efecto sería que no se garantizaría la vigencia de los principios constitucionales. Lo señalado hasta aquí se corrobora con el GRÁFICO 12.

Por otra parte, del “**CUADRO N° 13: LA VACATIO SENTENTIAE Y LA CERTEZA DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE INCOSTITUCIONALIDAD**”, que contiene la interrogante: ¿Considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad se

otorgará una mayor certeza de cumplimiento? y de una población encuestada de 62 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, muestra que para el 89% del total de la población encuestada considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad si se otorgará una mayor certeza de cumplimiento, mientras que para el 11% de ellos considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad no se otorgará una mayor certeza de cumplimiento. Todo lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 13.

De lo anterior, permitió formular a la población encuestada entre 62 personas conformada por Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque la pregunta: ¿Considera Ud. que es correcto regular en el plano constitucional la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a lo dispone el Tribunal constitucional?, contenida en el **“CUADRO N° 14: REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA VACATIO SENTENTIAE”**, de donde resulta que para el 94% del total de la población muestra encuestada considera que si es correcto regular en el plano constitucional la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a lo dispone el Tribunal constitucional?, mientras que para el 6% de ellos considera que no es correcto regular en el plano constitucional la suspensión de las sentencias de

inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a lo dispone el Tribunal constitucional, lo cual queda demostrado con el GRÁFICO 14.

3.1.3. Discusión de los Resultados

En base a los resultados de nuestra investigación, la mayoría de los encuestados (56 %) indicó que la principal función del tribunal constitucional es defender la constitución y proteger de los derechos fundamentales, por otro lado, un 28 % de los encuestados fue de opinión que la principal función del tribunal constitucional es proteger de los derechos fundamentales de la persona, a través de la adopción de mecanismos de protección como los procesos constitucionales, siendo una idea sesgado de la función del Tribunal constitucional y el restante 15 % de los encuestados señaló que la principal función del tribunal constitucional es interpretar la Constitución Política del Perú, infiriendo de esta postura, que aun un porcentaje de abogados que no tiene clara la idea respecto de la funciones del tribunal constitucional.

Asimismo respecto a los principios fundamental de la actuación del Tribunal Constitucional, se obtuvo que de nuestra población el 5 %, 10%, 27%, considera, que de los principio existen algunos que son carácter fundamental para la actuación del tribunal constitucional, sin embargo un porcentaje mayoritario (58%) señaló que el tribunal constitucional debe actuar que base no solo a un principio sino que en base a los principios de imparcialidad, supremacía de la Constitución y del debido proceso (formal y material).

El tribunal constitucional ofrece como medios de acción a los procesos constitucionales, las cuales son entendidas por el 14 % de nuestra población como procesos seguidos ante el tribunal constitucional para resolver un conflicto o incertidumbre jurídica, mientras que para un 65% de los encuestados son procesos donde se busca resolver un conflicto o incertidumbre jurídica, en base a la primacía de la constitución y vigencia de los derechos fundamentales, y para 21% de nuestros encuestados son procesos seguidos únicamente ante el Tribunal constitucional, lo cual es erróneo pues lo proceso constitucionales como el habeas corpus se inician el poder judicial.

Asimismo en base a los resultado, el proceso de inconstitucionalidad para el 31 % de los encuestados considera que es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución y su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria., mientras que el 51 % de los encuestados indicó que La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo., y el restante 18 % de los encuestados expreso que es una garantía constitucional que permite que no existan leyes, normas, entre otras, que contravengan a la constitución, desde perspectivas distintas de nuestros encuestados

Sobre la finalidad de un proceso de inconstitucionalidad el 44 % del total de encuestados precisó que es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución y su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria., por su parte, 38 % de los encuestados manifestó que su finalidad es dejar sin efectos(derogar) una ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo, estos dos anteriores porcentajes de opinión son acertadas respecto de la correcta finalidad del proceso de inconstitucionalidad, pero el restante 18 % de los encuestados expresó que su finalidad es la inaplicación de una norma jurídica inconstitucionalidad a un determinado caso, lo que supone una idea confusa respecto a la interrogante, pues esa inaplicación lo realizan los jueces ordinarios.

Sobre la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, el 13% de los encuestados señala existe inconstitucionalidad cuando está en contraposición a alguna disposición de la Constitución, mientras que para un 68% de los encuestados existe inconstitucionalidad cuando contraviene a la Constitución en la forma o fondo. Y el restante 19% indicó que existe inconstitucionalidad cuando contraviene alguna norma legal o con rango de ley, siendo esta última posición errada si solo existe contraposición a una ley o norma con rango legal, no significa que es inconstitucional, sino que es ilegal, lo cual será solucionado con la reglas de la temporalidad, especialidad y generalidad del principio de legalidad.

Respecto al concepto de las sentencias constitucionales, los resultados arrojan que el 15% del total de encuestados señaló que son sentencias emitidas por el tribunal constitucional, donde se emite un pronunciamiento respecto de un derecho fundamental., mientras que para un 19% de los encuestados precisó que son todas las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de una norma jurídica., y el porcentaje mayoritario (66%) de los encuestados expreso que son sentencias sobre la primacía de la constitución y la protección de los derechos fundamentales, emitidas por el tribunal constitucional.

Por su parte sobre la sentencia de inconstitucionalidad se tiene que para el 29 % de los encuestados es una sentencia emitida por el tribunal constitucional que declara incompatible una norma con rango de ley con la constitución., por su parte, un 27% del total de encuestados considera que es una sentencia que deja sin efectos una ley inconstitucional, surte efectos al día siguiente de su publicación, y el restante 44% de los encuestados señaló que es la sentencia mediante el cual se realiza un control de constitucional y tiene el objetivo de expulsar una ley inconstitucional del ordenamiento jurídico.

Sobre el principio que fundamenta, en mayor grado, una sentencia de inconstitucionalidad, para el 76% de los encuestados indicó que el principio de supremacía de la constitución mientras que el 16% de los encuestados precisó que es el principio de coherencia normativa y el otro 8% de los encuestados señaló que es el principio de respeto a los derechos fundamentales. Estas tres posturas en apoyo de un

determinado puede ser debatible, por la parte del principio de supremacía constitucional y coherencia normativa es claro el argumento, sin embargo, por el principio de respeto a los derechos fundamentales se puede inferir que una sentencia de inconstitucionalidad busca no solo hacer primar la constitución sino los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados por una ley.

Por otra parte, sobre el concepto de *vacatio sententiae*, se desprende que para el 28% del total de encuestados es aquella emitida por el Tribunal Constitucional en la que se establece que puede postergarse los efectos de su decisión en el tiempo, mientras que para el 40% de ellos manifestó que es aquella mediante el cual se suspenden los efectos de una sentencia de tribunal constitucional, y el otro 32% restante hizo de conocimiento que es un mecanismo por el cual el Tribunal Constitucional posterga los efectos de sus decisiones.

En esa misma perspectiva, sobre los fundamentos jurídico-sociales para suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, para el 37% de los encuestados el fundamento es evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del país, mientras que para un 39% de los encuestados señala que el fundamento es permitir que las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal constitucional, tengan un mayor grado de certeza de cumplimiento, y el restante 24 % de ellos considera que el fundamento es que se genere la expulsión de normas inconstitucionales

del sistema normativo, sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía..

En el supuesto de la no aplicación de la *vacatio sententiae*, es decir, la no suspensión de los efectos de una sentencia emitida en un proceso que declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley y sobre efectos el 37% de los encuestados señala que el efecto sería la existencia de vacíos legales., mientras que para el 42% de ellos indicó que el efecto sería la Inseguridad jurídica e incertidumbre de cumplimiento de la sentencia, y para el restante 21% de los encuestados el efecto sería que no se garantizaría la vigencia de los principios constitucionales. Cabe agregar que los efectos no son excluyentes, pues pueden materializarse en conjunto, lo que agravaría la situación,

Asimismo sobre la suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, con el objetivo de otorgar una mayor certeza de cumplimiento a las sentencias, el 89% del total de la población encuestada considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad si se otorgará una mayor certeza de cumplimiento, mientras que para el 11% de ellos considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad no se otorgará una mayor certeza de cumplimiento.

Por último se hizo la interrogante sobre la regulación en el plano constitucional de la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el

objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a lo dispone el Tribunal constitucional, de donde resulta que para el 94% del total de la población muestra encuestada considera que si es correcto regular en el plano constitucional, mientras que para el 6% de ellos considera que no es correcto regular en el plano constitucional la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad

3.1.4. Contratación de hipótesis

La hipótesis formulada en el proyecto de investigación fue: : —Sí, se regulará en el plano constitucional, la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, ENTONCES, se otorgará mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, ha sido confirmada a través de la presente investigación plasmada en el informe final presentado, es decir ha sido plenamente contrastado, confirmándola, en primer término con la opinión de adecuada por parte de los juristas tanto nacionales como extranjero, así como también por parte de la comunidad jurídica chiclayana, conformada por Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, quienes entienden que es correcto y que se otorgara mayor certeza de cumplimiento a la sentencia con la regulación en el plano constitucional de la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley,

En consecuencia, del trabajo de campo y de la información recopilada en el marco teórico, se infiere que todo ello nos da la razón en cuanto a la problemática descrita y la solución a alcanzar.

CONCLUSIONES

1. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional, jurisdiccional, autónomo, político, especializado que realiza control de constitucionalidad y tutela de derechos fundamentales; siendo el proceso de inconstitucionalidad un proceso iniciado cuando exista una norma jurídica con rango de ley que contravenga a la Constitución, ya sea de forma o fondo, o contenga una infracción directa o indirecta a la constitución, originando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional mediante sentencia de inconstitucionalidad que ordena la expulsión o adecuaciones de la norma inconstitucional.
2. La sentencia de inconstitucionalidad tiene su fundamento principal en el principio de supremacía constitucional; los fundamentos de esta sentencia son la existencia de infracciones de forma o fondo, totales o parciales, directas o indirectas y por comisión o infracción. Los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, pueden ser la expulsión de la norma inconstitucional del sistema normativo o su adecuación con el objetivo que sea conforme a la Constitución, resultando que la sentencia expulsa a la norma del ordenamiento jurídico y surte efectos al día siguiente de su publicación.
3. La *vacatio sententiae* consiste en la suspensión de los efectos de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, con el objetivo de evitar vacíos legales, incertidumbres jurídicas y situación de vulnerabilidad a la población. Los fundamentos jurídico sociales para la suspensión son: Evitar un vacío normativo que originaría graves

consecuencias en el orden legal y constitucional del país, otorgar mayor grado de certeza de cumplimiento a la sentencia y expulsión de normas inconstitucionales sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía.

4. La regulación en el plano positivo constitucional de la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad (denominada *vacatio sententiae*) de una norma jurídica con rango de ley que ha sido declarada inconstitucional, deviene arreglada a Derecho, toda vez que permitirá otorgarle mayor certeza de cumplimiento a la sentencia de inconstitucional y evitará la aparición de situaciones de vulnerabilidad para los ciudadanos.

RECOMENDACIONES

1. La comunidad jurídica en cumplimiento de su labor productiva de soluciones a problemáticas jurídicas y de relevancia social, debe promover el debate respecto a la *vacatio sententiae*, que permitirá la suspensión de sentencias de inconstitucionalidad, con el objetivo de no crear vacíos legales y otorgarle mayor certeza de cumplimiento a este tipo de sentencias.
2. Incluir la *vacatio sententiae* en el ordenamiento jurídico constitucional a través de su positivización, teniendo en cuenta los fundamentos jurídico-sociales para la suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, que son: Evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del país, permitir que las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal constitucional, tengan un mayor grado de certeza de cumplimiento, la expulsión de normas inconstitucionales del sistema normativo sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía.
3. La modificatoria constitucional debe realizarse en el artículo 204º de la Constitución Política de Perú:

Artículo 204.- La sentencia del Tribunal que declara la

inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial.

Se suspenden los efectos de la sentencia durante el plazo que el tribunal establezca para la adecuación normativa, cumplido dicho plazo la norma inconstitucional queda sin efecto.

**No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara
inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFÍA

Aguilera Portales, R. (2011) Constitución y democracia: Fundamentos políticos del Estado de derecho. Lima: Grijley.

Amaya, Jorge A. (2015), Control de constitucionalidad, 2ª edición, editorial Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina.

Cáceres Arce, J. (2004) El control constitucional en el Perú. Arequipa: LPG.

Eguiguren Praeli, F. (2009). Las sentencias interpretativas o «manipulativas» y su utilización por el Tribunal Constitucional peruano. En Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea (coords.). Aspectos del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho. Lima: IDEMSA.

Favoreu, L. (1994), —Los Tribunales ConstitucionalesII, Barcelona, Ariel.

Ferrer Mac-Gregor, E. (2004), —Ensayos sobre derecho Procesal ConstitucionalIII, México, Porrúa y CNDH,

Figueroa Gutarra, E. (2013), -El proceso de inconstitucionalidad. Desarrollo, límites y retosII, Pensamiento Constitucional N° 18, 2013, pp. 199-222 / ISSN 1027-6769, Lima-Perú.

Figuerola Gutarra, E. (2012) Derecho Constitucional. Estudio sistemático y comparado de la estructura del Estado, Tomo II. Lima: Editorial San Marcos,

Fix-Zamudio, H. y Ferrer Mac-Gregor, E. (2008) Las sentencias de los Tribunales Constitucionales. Lima-Arequipa: Centro de Estudios Constitucionales. Tribunal Constitucional-ADRUS,

García Pelayo (1981), «El —statusll del Tribunal Constitucional», en: *Revista Española de Derecho Constitucional*, N.º 1, año I, enero-abril.

García Belaunde, D. (2011) Kelsen en París: una ronda en torno al «modelo concentrado. En Peter Häberle y Domingo García Belaúnde (coords.), El control del poder. Homenaje a Diego Valadés. Serie Doctrina Jurídica 583, Tomo II. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

García Toma, V. (2005) Teoría del Estado constitucional, pp. 518-583. Lima: Palestra.

García De Enterría, E. (1994), La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Tercera edición. Madrid: Editorial Civitas.

García Belaunde, D. (2000) De la jurisdicción constitucional al Derecho Procesal Constitucional. Segunda edición. Lima: Grijley.

García Belaunde, D. (2009) El Derecho Procesal Constitucional en perspectiva. Lima: IDEMSA.

Gozaíni Osvaldo (2006), introducción al derecho procesal constitucional.

Lima-Perú: Editorial Rubinzal-Culzoni Editores

Hakansson Nieto, C. (2012) Curso de Derecho Constitucional. Segunda edición. Lima: Palestra.

Häberle, P. (2003) *El Estado constitucional*. Lima: Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Landa Arroyo, C. (2007) *Tribunal Constitucional y Estado democrático*.

Tercera edición. Lima: Palestra.

Landa Arroyo, C. (2011) *Organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional, Entre el Derecho y la Política*, Palestra Editores, Lima.

López Guerra, Luis (2004), «La organización y la posición institucional de la justicia constitucional en Europa», en: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, tomo I, Konrad Adenauer-Stiftung, Montevideo.

Martínez Sospedra, M. (1981), —El Tribunal Constitucional como órgano políticoll, en Dirección General de lo Contencioso del Estado, El Tribunal Constitucional, vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

Morales Saravia, F. (2014), El Tribunal Constitucional del Perú: organización y funcionamiento Estado de la cuestión y

propuestas de mejora, Fondo editorial, Academia de la Magistratura, Lima-Perú

Prieto Sanchís, L. (2002), -Derechos fundamentales, neo constitucionalismo y ponderación judicialll. Lima: Palestra Editores,

Prieto Sanchís, L. (2003), —Justicia constitucional y derechos fundamentalesll. Madrid: Trotta.

Saénz Dávalos, L, Carpio Marcos, E. y Rodríguez Santander, R. (2006)
Informe al Pleno del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley que modifica algunas de sus funciones, N°. 1, enero- marzo.
Gaceta del Tribunal Constitucional,

LEGISLACIÓN

CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ

CÓDIGO PROCESAL COSNTITUCIONAL

LEY ORGANIZA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LINKOGRÁFICAS

Blume Fortini, Ernesto. La reforma del Tribunal Constitucional peruano.

Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/343/5.pdf>.

Edmundo, C. (2008) Los efectos temporales de las sentencias de inconstitucionalidadll, en Themis, N° 55, Lima, pág. 109-123, recuperado de:

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9228>

TRUJILLO RINCÓN, María Antonia. —La posición del Tribunal Constitucional en el sistema de los órganos supremos del Estado—, Recuperado de:
www.dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=816260

MONTOYA CHÁVEZ, V. (2015) EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA (1996-2014), CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, Lima Perú, Recuperado de:
http://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/CCEP/files/cursos/2017/files/el_proceso_de_inconstitucionalidad.pdf

ACUÑA CHAVEZ, ARACELI (2014) -Funciones y competencias del tribunal constitucional peruano, recuperado de:
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5437/ACUNA_CHAVEZ_ARACELI_FUNCIONES_COMPETENCIAS.pdf?sequence=1

Highton, E. (2015), SISTEMAS CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, Recuperado de:
www.juridicas.unam.mx

Haro Reyes, D. (2007), Los sistemas de control de la constitucionalidad: Comentarios de la actualidad mexicana, recuperado de:
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/ppperiod/jurjal/jurjal53/jurjal53_3.pdf

JURISPRUDENCIA

Corte IDH, Caso Usón Ramírez versus Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de noviembre de 2009, serie C, N.º 207, párrafo 117

STCP recaída en el Exp. N.º 0023-2003-AI/TC, del 28 de octubre de 2004, fundamento 34.

168 STCP recaída en el Exp. N.º 2465-2004-AA/TC, del 11 de octubre de 2004, fundamento nueve.

STCP recaída en el Exp. N.º 8125-2005-HC, del 25 de enero de 2006, fundamento seis.

STCP recaída en el Exp. N.º 0090-2004-AA, del 17 de julio de 2004, fundamento 22.

STCP recaída en el Exp. N.º 05637-2006-PA/TC, del 3 de julio de 2007, fundamento 11.

STCP recaída en el Exp. N.º 00023-2003-AI/TC, del 28 de octubre de 2004, fundamento 31.

ANEXOS

ANEXO 1: Matriz de consistencia

TITULO	PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS
-REGULACIÓN DE LA DECLARATORIA DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE DISPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA JURÍDICA CON RANGO DE LEY (Lambayeque, 2015-2017)	¿De qué manera la regulación constitucional de la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley otorgará mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional? (Lambayeque, 2015-2017)	<p>Objetivo Principal: Proponer la regulación de la figura jurídica de la VACATIO SENTENTIAE, como mecanismo de declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia que dispone la inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el propósito de otorgar mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conocer y comprender la figura jurídica de la VACATIO SENTENTIAE. - Analizar los efectos que acarrea suspender los efectos de una sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad. - Determinar el fundamento normativo- constitucional por lo que el Tribunal Constitucional emite sentencias de inconstitucionalidad de una norma con efectos suspensivos en el tiempo. - Sustentar los fundamentos de un proyecto de ley que determine taxativamente la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. 	-Sí, se regulará en el plano constitucional, la declaratoria de suspensión de los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, ENTONCES, se otorgará mayor certeza de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos



Ejecución del proyecto de investigación

**“REGULACIÓN DE LA DECLARATORIA DE SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE DISPONE LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA JURÍDICA CONTRA
DE LEY (Lambayeque, 2015-2017)”**

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. **Según su conocimiento en asuntos Jurídicos: ¿Cuál es la principal función del Tribunal Constitucional?**
 - a) Defender constitución y proteger de los derechos fundamentales.
 - b) Proteger de los derechos fundamentales de la persona, a través de la adopción de mecanismos de protección como los procesos constitucionales
 - c) Interpretar la Constitución Política del Perú
2. **¿Cuál, de los siguientes, constituye un principio principal de la actuación del Tribunal Constitucional:**
 - a) Principio de imparcialidad
 - b) Principio debido proceso (formal y material)
 - c) Principio supremacía de la constitución
 - d) Todas las anteriores
3. **A su criterio ¿Que son los procesos constitucionales?**
 - a) Son procesos seguidos ante el tribunal constitucional para resolver un conflicto o incertidumbre jurídica.
 - b) Son procesos donde se busca resolver un conflicto o incertidumbre jurídica, en base a la primacía de la constitución y vigencia de los derechos fundamentales
 - c) Son procesos seguidos únicamente ante el Tribunal constitucional
4. **¿En qué consiste el proceso de inconstitucionalidad?**
 - a) Es un proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que, por el fondo o la forma contraviene a la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria.
 - b) La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
 - c) Es una garantía constitucional que permite que no existan leyes, normas, entre otras, que contravengan a la constitución.
5. **Según sus conocimientos ¿Cuál es la finalidad de un proceso de inconstitucionalidad?**

- a) Expulsar a una norma jurídica que no está en consonancia con la Constitución del ordenamiento jurídico.
 - b) Inaplicación de una norma jurídica inconstitucionalidad a un determinado caso.
 - c) Dejar sin efectos(derogar) una ley que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo
- 6. ¿Cuándo es inconstitucional una norma jurídica con rango de ley?**
- a) Cuando está en contraposición a alguna disposición de la Constitución.
 - b) Cuando contraviene a la Constitución en la forma o fondo.
 - c) Cuando contraviene alguna norma legal o con rango de ley.
- 7. Según su experiencia ¿Qué son las sentencias constitucionales?**
- a) Son sentencias emitida por el tribunal constitucional, donde se emite un pronunciamiento respecto de un derecho fundamental.
 - b) Son todas las sentencias que resuelven sobre la constitucionalidad de una norma jurídica
 - c) Son sentencias sobre la primacía de la constitución y la protección de los derechos fundamentales, emitidas por el tribunal constitucional.
- 8. ¿Qué entiende por sentencia de inconstitucionalidad?**
- a) Es una sentencia emitida por el tribunal constitucional que declara incompatible una norma con rango de ley con la constitución.
 - b) Es una sentencia que deja sin efectos una ley inconstitucional, surte efectos al día siguiente de su publicación.
 - c) Es la sentencia mediante el cual se realiza un control de constitucional y tiene el objetivo de expulsar una ley inconstitucional del ordenamiento jurídico.
- 9.Cuál es el principio que fundamenta, en mayor grado, una sentencia de inconstitucionalidad:**
- a) Principio de supremacía de la constitución
 - b) Principio de coherencia normativa
 - c) Principio de respeto a los derechos fundamentales.
- 10. ¿Qué entiende por vacatio sententiae?**
- a) Es aquella emitida por el Tribunal Constitucional en la que se establece que puede postergarse los efectos de su decisión en el tiempo.
 - b) Es aquella mediante el cual se suspenden los efectos de una sentencia de tribunal constitucional.
 - c) Mecanismo por el cual el Tribunal Constitucional posterga los efectos de sus decisiones.
- 11. Los fundamentos jurídico-sociales para suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad son:**
- a) Evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del país.
 - b) Permitir que las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal constitucional, tengan un mayor grado de certeza de cumplimiento
 - c) Que se genere la expulsión de normas inconstitucionales del sistema normativo, sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía.
- 12. A su parecer ¿Cuáles serían los efectos de no suspender los efectos de una sentencia emitida en un proceso que declara la inconstitucionalidad de una norma?**

- a) La existencia de vacíos legales
- b) Inseguridad jurídica e incertidumbre de cumplimiento de la sentencia.
- c) No se garantizaría la vigencia de los principios constitucionales.

13. ¿Considera que al suspender los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad se otorgará una mayor certeza de cumplimiento?

- a) Si
- b) No

14. ¿Considera Ud. que es correcto regular en el plano constitucional la suspensión de las sentencias de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, con el objetivo de otorgarle mayor certeza de cumplimiento a lo dispone el Tribunal constitucional?

- a) Si
- b) No

¡Muchas gracias...!

Anexo 3: Propuesta de regulación constitucional de la vacatio sententiae

PROYECTO DE LEY

**“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 204º DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL PERU”**

LEY N°...

1. OBJETO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA:

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 204º de la Constitución Política del Perú que regula lo referido a los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley.

2. FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA-

Exposición de motivos:

Se plantea como propuesta la modificatoria del artículo 204º de la Constitución Política del Perú que regula lo referido lo referido a los efectos de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley.

Propuesta sustentada normativamente en el Artículo 204º, referido a la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se establece que:

La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.

Esta disposición constitucional, supone que las sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos inmediato, es decir, dejan sin eficacia a una norma inconstitucional de forma inmediata, lo que ocasionaría la aparición de vacíos legales en el sistema normativo, originan incertidumbre jurídica en la solución de conflictos de interés y no permiten que la sentencia de inconstitucionalidad tenga un mayor grado de certeza de cumplimiento.

Teniendo como sustento a lo planteado, las sentencias que el Tribunal Constitucional ha expedido, en los siguientes expedientes: Expediente N° 00010-2002-AI/TC, Expediente N° 00023-2003-AI/TC y Expediente N° 0004-2006-PI/TC, en las cuales se emplearon por primera vez el término —*Vacatio Sententiae*—, mediante el cual se dispone la suspensión de la eficacia de una parte del fallo. Es decir, se modulan los efectos de la decisión en el tiempo.

Asimismo, disposición similar se encuentra en el artículo 81° del Código Procesal Constitucional, donde se señala que:

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación (...).

3. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

3.1. MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL:

“Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 204° de la Constitución

Política del Perú en los siguientes términos:

<<**Art. 204°**.- La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial.

Se suspenden los efectos de la sentencia durante el plazo que el tribunal establezca para la adecuación normativa. cumplido dicho plazo la norma inconstitucional queda sin efecto.

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal.

Artículo 2°. - *Deróguense todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley”.*

4. ANÁLISIS DEL COSTO-BENEFICIO

El proyecto de ley, no irroga gasto público ya que su propósito es evitar una regulación incongruente a la realidad de las declaratorias de inconstitucionalidad de una norma, y para lo cual el beneficio será Evitar un vacío normativo que originaría graves consecuencias en el orden legal y constitucional del país, permitir que las sentencias de inconstitucionalidad del Tribunal constitucional, tengan un mayor grado de certeza de cumplimiento y que se genere la expulsión de normas inconstitucionales del

sistema normativo, sin producir situaciones de vulnerabilidad para la ciudadanía